

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE  
DOMINIO DE ANTIOQUIA

Medellín, veinticuatro (24) de julio de dos mil diecisiete (2017)

RADICADO:	05000 31 20 001 2016 00008
SENTENCIA:	Nº 13
PROCESO:	EXTINCIÓN DE DOMINIO
AFECTADA:	LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO
DECISIÓN:	DECLARA LA NO PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

1. ASUNTO A TRATAR

Procede el Despacho a emitir el respectivo fallo, que en derecho corresponda dentro del proceso de extinción de dominio que se adelanta sobre el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No.018-93819, de propiedad de la señora Luz Miriam Castaño Quintero, una vez verificada la inexistencia de vicio alguno que pueda invalidar la actuación procesal.

2. SITUACIÓN FÁCTICA QUE DIO ORIGEN AL PROCESO

Se originaron las presentes diligencias en informe de policía judicial Nro. S-2012-031758 del diez (10) de agosto de 2012, dirigido a la Unidad Nacional de Extinción de Dominio, poniéndose en conocimiento el inmueble ubicado en la calle 21ª Nro. 46A-89 en el barrio La Ciudadela del Municipio de Marinilla, Antioquia, el cual fue vinculado dentro de la estrategia TEMC – Tráfico de Estupefacientes en Menores Cantidades, liderada por la Policía Nacional en coordinación de la Fiscalía General de la Nación. Investigación penal radicada bajo la NUNC. 05 440 60 00340 2011 00020 por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

3. ANTECEDENTES PROCESALES

Como se desprende de las actuaciones, concretamente de la diligencia de allanamiento realizada doce (12) de mayo de 2011, se logró establecer que el inmueble posiblemente estaba siendo destinado a la venta y comercialización de sustancias estupefacientes, toda vez que al

Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

citó  
1. Cent.  
6 la f.  
vin

**Sentencia N° 013  
Ley 1708 de 2014**

registrar la vivienda se halló en debajo de un camarote de la habitación No1. Concretamente en una esquina, una bolsa plástica blanca que en su interior contenía una sustancia vegetal color verde, evidencia No1.

En el segundo piso del inmueble se obtuvo de un ropero plástico 35 bolsas pequeñas plásticas transparentes de cierre hermético las cuales contenían en su interior una sustancia vegetal color verde recolectadas como evidencia No2. Además en el baño de la misma habitación se encontraron 12 bolsas plásticas de cierre hermético utilizadas para el empaque de la sustancia, en la habitación No 2 del mismo segundo piso se descubrió debajo de la almohada de la cama del señor Elder Julián Toro Cataño 2 bolsas plásticas pequeñas transparentes de cierre hermético con sustancia vegetal color verde recolectada como evidencia No3.

También se hallaron dentro de un basurero 5 bolsas transparentes de cierre hermético con sustancia vegetal color verde, recolectada como evidencia No4.

Las sustancias descritas luego de ser sometidas a prueba de identificación preliminar homologada PIPH, arrojaron un resultado positivo para Cannabis y sus derivados para un peso bruto de 471 gramos y neto de 421 gramos.

Así, mediante resolución Nro. 0996 del veintiuno (21) de septiembre de 2012, la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, asignó el conocimiento de la presente acción a la fiscalía Veintiuno (21).

Ente Fiscal que en proveído del treinta y uno (31) de octubre de 2012, ordenó de oficio iniciar el trámite de extinción del derecho de dominio con fundamento en el artículo 34 de la Constitución Nacional y el numeral 3° del artículo 2° de la ley 793 de 2002, sobre el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 018-93819, por considerar que este ha sido destinado para actividades ilícitas y la propietaria no ha cumplido con la función social y constitucional que le asiste; igualmente se decretó el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Folios 52 al 59 C.Orig. 1



Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013**  
**Ley 1708 de 2014**

Providencia, notificada personalmente a los afectados y al agente del ministerio, el 20 de octubre de 2012<sup>2</sup>, 23 de enero de 2013<sup>3</sup> y 18 de octubre de 2013<sup>4</sup>, respectivamente

Reasignadas las diligencias, el quince (15) de mayo de 2014, la Fiscal 21, procedió con la fijación del emplazamiento de los terceros indeterminados con interés en la causa<sup>5</sup> el cual fue publicado en radio y prensa dentro del término procesal correspondiente.

Posteriormente dentro del término legal, la señora Luz Miriam Castaño Quintero, se pronunció por medio de apoderado judicial mediante escrito de oposición<sup>6</sup>. De la misma manera lo hizo la representante legal de COMFAMA<sup>7</sup>, pero sin presentar oposición alguna.

Así mismo atendiendo que los terceros indeterminados con interés en la causa no concurrieron, el diez (10) de junio de 2014, les fue designado curador ad-litem<sup>8</sup>, tomando posesión del cargo, la doctora Judith Aponte Melo, a quién se le notificó personalmente la resolución de inicio.

Adicionalmente, a través de resolución N° 550 del veintidós (22) de julio y 558 del 15 de agosto de 2014, emitida por la Dirección de Fiscalías Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, fue variada la asignación de las diligencias, correspondiéndole a la Fiscalía Treinta y Cuatro Especializada en Extinción de Dominio, el conocimiento del trámite.

Superado el término dispuesto por el numeral 5° del artículo 13 de la ley 793, modificado por el artículo 82 de la Ley 1453 de 2011, el nueve (9) de noviembre de 2015, se pronunció sobre la práctica de pruebas<sup>9</sup>.

Seguidamente se continuó con la práctica de pruebas y concluido el periodo probatorio, se corrió traslado para que los intervinientes presentaran sus alegatos de conclusión<sup>10</sup>.

Agotados los trámites de la ley en comento, la Fiscalía el veintiuno (21) de julio de 2016, decretó resolución de procedencia de la extinción de

<sup>2</sup> Folio 68 C. Org. 1

<sup>3</sup> Folio 79 C. Org. 1

<sup>4</sup> Folio 108 C. Org. 1

<sup>5</sup> Folio 115 C. Org. 1

<sup>6</sup> Folio 1 al 92 C. Org. Oposiciones

<sup>7</sup> Folio 43 y 44 C. Org. 1

<sup>8</sup> Folio 122 C. Org. 1

<sup>9</sup> Folios 139 al 146 C. Org. 1

<sup>10</sup> Folio 183 C. Org. 1

Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013  
Ley 1708 de 2014**

dominio sobre el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 018-93819.

Así las cosas, las actuaciones fueron remitidas al reparto de los jueces Penales del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, asignándosele al Juzgado Primero quien mediante auto del dieciocho (18) de octubre de 2016, advierte carecer de competencia para avocar conocimiento del proceso, procediendo a remitirlo al reparto de los jueces Penales del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, correspondiéndole a este despacho conocer del presente asunto.

En consecuencia, este Juzgado avocó conocimiento el dos (2) de noviembre de 2016 y dispuso la notificación personal a los sujetos procesales<sup>11</sup> de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 138 y 141 de la ley 1708 de 2014, para lo cual se libraron las comunicaciones respectivas.

Respecto de los terceros indeterminados y demás titulares de derechos principales o accesorios que pudieran tener un interés legítimo en el proceso, se fijó edicto emplazatorio en las páginas web de la fiscalía<sup>12</sup> y Rama Judicial<sup>13</sup>, en Radio Difusora<sup>14</sup> COREDI FM 90.5, periódico de amplia circulación nacional EL MUNDO<sup>15</sup> y en la secretaría del Despacho del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2016, conforme lo establecido en el artículo 140 del Código de Extinción de Dominio.

Surtidas en debida forma las notificaciones y vencido el traslado de cinco (5) días a que refiere el artículo 141 de la ley 1708 de 2014, mediante auto del veintiuno (21) de marzo de 2017, el Despacho admite a trámite el requerimiento presentado por la Fiscalía Treinta y Cuatro (34) y procede con el decreto de pruebas.

Precluido el término probatorio, se corrió traslado para alegar de conclusión y surtido este, pasaron las diligencias para dictar sentencia.

#### **4. REQUERIMIENTO DE LA FISCALÍA**

La Fiscalía solicitó la declaratoria de extinción del derecho de dominio

<sup>11</sup> Folios 14 y 15 C.Org.2

<sup>12</sup> Folio 23 C.Org.2

<sup>13</sup> Folio 24 C.Org.2

<sup>14</sup> Folio 38 C.Org.2

<sup>15</sup> Folio 39 C.Org.2



Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013**  
**Ley 1708 de 2014**

del bien inmueble de propiedad de la señora Luz Miriam Castaño Quintero, argumentando que se encontraba en curso de la causal 3ª prevista en el artículo 2 de la ley 793 de 2002 modificado por el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011, en razón de que el bien era utilizado para la comisión de actividades ilícitas de tráfico de estupefacientes.

Al respecto, adujo que una vez revisado y valorado el material probatorio que obra en el plenario, como las copias de los informes de registro y allanamiento de las distintas actuaciones penales, se determinó que el bien fue utilizado para una acción delictiva.

Señala que mediante labores de investigación se logró determinar que el señor Elder Julián Toro Castaño, persona capturada en flagrancia en la diligencia de allanamiento es hijo de la señora Luz Miriam Castaño Quintero; lo que evidenció que el tenedor de esa propiedad se ha dedicado a la actividad ilícita del tráfico de estupefacientes, y vive actualmente en esa vivienda junto con otros miembros de su núcleo familiar como su madre y hermano.

Circunstancias que permite afirmar que la propietaria del inmueble referenciado ha incumplido el deber de cuidado de esa propiedad, faltando ostensiblemente con el fin social y ecológico impuestos por la constitución política, de tal manera, que se hace imposible continuar con la protección de la propiedad privada conforme al art. 58 inciso 2, que preceptúa "la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica", por lo que dichas situaciones para las cuales se destinó, hacen que se deriven consecuencias en el ámbito de la regulación normativa en materia de Extinción de Dominio.

Así las cosas, para dilucidar las razones de la pretensión de extinción de dominio sobre el inmueble referenciado la fiscalía aportó las siguientes pruebas:

#### **PRUEBAS DOCUMENTALES:**

1. Carpeta Original de investigación donde versa informe de policía Judicial de la NUNC 054406000340201100020, suscrito por policía judicial, en el cual documenta información concerniente al allanamiento y registro practicado en la fecha de 12 de mayo de 2011, ordenado por la Fiscalía Seccional 094 del Municipio

Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013**  
**Ley 1708 de 2014**

Marinilla. Ubicado en la calle 21 No. 46 A 89. (C. Original 1 folios 4 al 49).

2. La documentación obtenida en fase inicial y que obra (C.Org. Folios 1 al 139).
3. Informe de Policía Judicial Nro. 0513 del veinticinco (25) de febrero de 2016 sobre las actuaciones desarrolladas en virtud a lo ordenado en el auto de decreto de pruebas (folio 152 a 153 C. Org1).
4. Respuesta Exhorto Comisorio con relación oficio No. 00297 de fecha doce (12) de febrero de 2016, dirigido a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
  - Oficio No. 00298 del doce (12) de febrero de 2016, dirigido al Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento con el fin de allegar copia de la sentencia condenatoria de Elder Julián Toro Castaño.
  - Se relacionaron las labores de vecindario en el barrio Ciudadela donde se ubica el inmueble, para establecer si la residencia está siendo objeto de expendio de estupefacientes.
  - Se verificó en el sistema Penal Acusatorio (SPCA) y el sistema ley 600 SIJUF cedula de la persona indicada. (folio 154 y 155 C.Org1).
5. Sentencia proferida por el Juzgado Penal de Circuito con Funciones de Conocimiento de Marinilla Antioquia, donde se condena a Elder Julián Toro Castaño en calidad de autor penalmente responsable de la conducta punible de Tráfico Fabricación o Porte de Estupefacientes. (folios 158 al 184 C. Org1).
6. Respuesta oficio No 5527 del 11 de febrero de 2016, por parte de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Seccional Medellín.
7. Escrito de oposición y solicitud de pruebas (folios 1 al 4 C.Org Oposiciones).
8. Recibos de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama (folios 5 al 92 C.Org Oposiciones).



Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013**  
**Ley 1708 de 2014**

9. Escritura Pública del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 018-93819 (folios 44 al 49 C.Org1).

10. Oficio Nro. S-2012-031758/SIJIN- GIDES 73.32 de fecha de diez (10) de agosto de 2012 (folio 1 a 49 C.1).

## **5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO**

### **5.1 COMPETENCIA**

Este Juzgado es competente para conocer del presente trámite de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la ley 1708 de 2014, que señala:

*"Artículo 35. Competencia territorial para el juzgamiento. Corresponde a los Jueces del Circuito Especializado en Extinción de Dominio del distrito judicial donde se encuentren los bienes, asumir el juzgamiento y emitir el correspondiente fallo..."*

### **5.2 LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**

Una vez agotadas las etapas procesales y fases correspondientes, la Fiscalía General de la Nación ha puesto en consideración de este Despacho judicial un cúmulo de pruebas, con el fin de que se estudie la viabilidad de declarar la extinción del derecho real de dominio sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria Nro. 018-93819, al considerar que se cumple con los presupuestos descritos en la causal 3° prevista en el artículo 2 de la ley 793 de 2002 modificado por el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011.

Con el objeto de desarrollar esta idea, se debe señalar que el inciso 2° del artículo 34 de la Constitución Política de 1991 contempló la posibilidad que, a través de sentencia judicial, pudiera extinguirse el dominio de "bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social", por lo que en desarrollo de tal precepto, se expidió la Ley 333 de 1996, mediante la cual, se establecieron normas concernientes a regular la extinción del derecho de dominio del patrimonio adquirido de manera ilícita, como mecanismo para responder al aumento de la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción, así como para recuperar los bienes producto de actividades ilícitas.

Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

Sentencia N° 013  
Ley 1708 de 2014

Posteriormente, tal normatividad fue derogada por la Ley 793 del 2002, declara exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-740 del 28 de agosto del 2003 con ponencia del Magistrado JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, en la que con relación a la naturaleza jurídica de la acción en comento, sentó:

*“...la acción de extinción de dominio se dotó de una particular naturaleza, pues se trata de una acción constitucional pública, jurisdiccional, autónoma, directa y expresamente regulada por el constituyente y relacionada con el régimen constitucional del derecho de propiedad.*

*Es una acción constitucional porque no ha sido concebida ni por la legislación ni por la administración, sino que, al igual que otras como acción de tutela, la acción de cumplimiento o las acciones populares, ha sido consagrada por el poder constituyente originario como primer nivel de juridicidad de nuestro sistema democrático.*

*Es una acción pública porque el ordenamiento jurídico colombiano sólo protege el dominio que es fruto del trabajo honesto y por ello el Estado, y la comunidad entera, alientan la expectativa de que se extinga el dominio adquirido mediante títulos ilegítimos, pues a través de tal extinción se tutelan intereses superiores del Estado como el patrimonio público, el Tesoro público y la moral social.*

*Es una acción judicial porque, dado que a través de su ejercicio se desvirtúa la legitimidad del dominio ejercido sobre unos bienes, corresponde a un típico acto jurisdiccional del Estado y, por lo mismo, la declaración de extinción del dominio está rodeada de garantías como la sujeción a la Constitución y a la ley y a la autonomía, independencia e imparcialidad de la jurisdicción.*

*Es una acción autónoma e independiente tanto del ius puniendi del Estado como del derecho civil. Lo primero, porque no es una pena que se impone por la comisión de una conducta punible sino que procede independientemente del juicio de culpabilidad de que sea susceptible el afectado. Y lo segundo, porque es una acción que no está motivada por intereses patrimoniales sino por intereses superiores del Estado (...).*

*Es una acción directa porque su procedencia está supeditada únicamente a la demostración de uno de los supuestos*



Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013**  
**Ley 1708 de 2014**

consagrados por el constituyente: enriquecimiento ilícito, perjuicio del Tesoro Público o grave deterioro de la moral social.

Finalmente, es una acción que está estrechamente relacionada con el régimen constitucional del derecho de propiedad, ya que a través de ella el constituyente estableció el efecto sobreviniente a la adquisición, solo aparente, de ese derecho por títulos ilegítimos. Esto es así, al punto que consagra varias fuentes para la acción de extinción de dominio y todas ellas remiten a un título ilícito...".

Así las cosas, se concluye que el proceso extintivo del dominio, cuyo origen es eminentemente constitucional constituye una restricción legítima del derecho de propiedad de quienes lo ejercen atentando, directa o indirectamente, contra los intereses superiores del Estado; es un instrumento autónomo, independiente y garantista, orientado a defender el justo título, y a reprimir aquél que riñe con los fines legales y constitucionales del patrimonio; tiene absoluta reserva judicial, pues la titularidad del dominio de un bien determinado, sólo puede ser desvirtuada por el Juez competente, una vez acrediten los presupuestos legales para ello; y no genera contraprestación económica alguna para el afectado, como consecuencia del origen ilegítimo y espurio de sus recursos.

En ese sentido, en desarrollo de la facultad otorgada por la norma, el legislador a través de la expedición de la ley 333 de 1996, el Decreto Legislativo 1975 de 2002, la ley 793 de 2002 y el actual Código de Extinción de Dominio Ley 1708 de 2014, ha reglado el procedimiento para declarar extinguido el dominio, por lo que esta acción ha sufrido de varias transformaciones desde su primer desarrollo legal.

Es por ello, que en la actualidad si bien la normatividad aplicable a estos asuntos es la ley 1708 de 2014, como quiera que en virtud de su vigencia derogó de manera expresa la ley 793 de 2002 y sus modificaciones, también lo es que, esta ley trae como régimen de transición lo siguiente:

**“Artículo 217:** Los procesos en que se haya proferido resolución de inicio con fundamento en las causales que estaban previstas en los numerales 1 al 7 de la ley 793 de 2002, antes de la expedición de la ley 1453 de 2011, seguirán rigiéndose por dichas disposiciones.

De igual forma, los procesos en que se haya proferido resolución de inicio con fundamento en las causales que estaban previstas en el

Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013**  
**Ley 1708 de 2014**

artículo 72 de la ley 1453 de 2011, seguirán rigiéndose por dichas disposiciones".

Resulta claro que el régimen de transición establecido en el artículo 217 de la ley 1708 de 2014, hace referencia a la aplicación de las causales previstas en los numerales 1 a 7 de la ley 793 de 2002 y del artículo 72 de la ley 1453 de 2011, y no a las normas procesales y sustanciales que se deben aplicar en materia de extinción de dominio.

Es decir, para el caso particular, si bien la Fiscalía en la fase inicial se rigió por las reglas de la ley 793 de 2002, modificada por ley 1453 de 2011, dichas disposiciones seguirán rigiéndose por el actual Código de extinción de dominio que derogó de manera expresa dicha normatividad; sin embargo, las actuaciones adelantadas bajo dichas reglas en la fase inicial se mantendrán conforme las leyes vigentes para la época en que se decretaron y profirieron.

En cuanto a los fundamentos jurídicos planteados en torno a la aplicación de la Ley vigente en el tiempo, resulta pertinente recordar la regla general, según la cual, salvo disposición expresa en contrario, las normas procesales son de aplicación inmediata y rigen hacia el futuro; ello en consonancia con los preceptos del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, que dispone:

"Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubiesen comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones..." Cursiva y subrayado fuera de texto.

Pues bien, según la citada preceptiva, las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

De tal manera que, el presente asunto se rige bajo los parámetros de la ley 1708 de 2014, según lo enunciado y; por tal motivo, será la



Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013**  
**Ley 1708 de 2014**

normatividad que tendrá en cuenta este plenario para resolver el caso bajo estudio.

### **5.3 CAUSALES DE LA ACCIÓN**

Definido lo anterior, se entrará a examinar si el presente caso se configura la causal 3° del artículo 2 de la ley 793/2002 modificado por el artículo 72 de la ley 1453 de 2011, cuando dio apertura al trámite respectivo y cuando elevó resolución de procedencia extintiva, norma que prescribe lo siguiente:

*"Artículo 2. Causales. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriere cualquiera de los siguientes casos:*

*(...)*

- 3. Los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, sean destinadas a éstas, o correspondan al objeto del delito.*

*"Parágrafo 1°. Las actividades ilícitas a las que se refiere el presente artículo son:*

- 2. Las que impliquen grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son actividades que causan deterioro a la moral social, las que atenten contra la salud pública, el orden económico y social, los recursos naturales y el medio ambiente, seguridad pública, administración pública, el régimen constitucional y legal, el secuestro, secuestro extorsivo y proxenetismo."*

De acuerdo con la causal anteriormente descrita, se hacen extinguidos los bienes cuando por omisión el propietario del bien deja de cumplir con la función social o ecológica que le fue asignada por mandato constitucional en el artículo 58.

En este orden de ideas, esta causal, técnicamente procede, cuando por omisión a los deberes que demanda la propiedad, no se ejerció un control efectivo, como lo deben hacer las personas diligentes y prudentes.

Aunado a lo anterior, hace énfasis el despacho, que cuando se discute si un bien es utilizado como medio o instrumento para la realización de

Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

Sentencia N° 013  
Ley 1708 de 2014

al...  
ado de L...  
ma en que...  
ja familiar. Docu...  
os de marioneta para...  
j de la sentencia...  
ado el señor J...  
ito ser esc...  
as neces...  
ilenes

actividades ilícitas, se prescinde de consideraciones atinentes al origen del mismo, pues estas se centran en la destinación que se le otorga al bien.

Resulta para el despacho oportuno traer a colación pronunciamiento jurisprudencial de la Honorable Corte Constitucional y acoger sus planteamientos en los siguientes términos:

"31. La causal (...), amplía el ámbito de procedencia de la acción; pues, de acuerdo con ella, no recae sólo sobre los bienes ilegítimamente adquiridos, sino también sobre aquellos utilizados como medios o instrumentos para la comisión de actividades ilícitas o que se destinan a su comisión o que corresponden al objeto del delito.

Pues bien; si ello es así, cuando la causal (...) extiende la procedencia de la extinción de dominio a los bienes utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, y para lo que aquí interesa, a aquellos que han sido destinados a tales actividades o que correspondan al objeto del delito, lo que hace es conjugar en un solo enunciado normativo las dos modalidades de extinción de dominio a que se ha hecho referencia, pues en estos supuestos la acción no procede por la ilegitimidad del título, sino por dedicarse los bienes a actividades ajenas a la función social y ecológica de la propiedad. Bien se sabe, que ésta debe ejercerse de tal manera que se orienta a la generación de riqueza social y a la preservación y restauración de los recursos naturales renovables, y no a la comisión de conductas ilícitas."<sup>16</sup>

A su turno el artículo 1° numeral 2° de la ley que gobierna la presente causa, señala que debe considerarse como actividad ilícita toda aquella tipificada como delictiva, independiente de cualquier declaración de responsabilidad penal, así como toda actividad que el legislador considere susceptible de aplicación de esta ley por deteriorar la moral social (norma acusada declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-958 de 2014).

En materia de potestad punitiva del Estado también conocido como *ius puniendi* – derecho penal subjetivo, por política criminal nuestro legislador ha declarado punibles determinados comportamientos que por su gravedad atentan contra la convivencia pacífica creando una serie de tipos penales en pro de la salvaguarda de los bienes jurídicos.

En el presente asunto, encontramos que nuestra legislación penal dentro de las conductas que atentan contra los bienes jurídicos, ha tipificado como delito contra la salud pública TÍTULO XIII - CAPÍTULO SEGUNDO el

<sup>16</sup> Sentencia C-740, del 28 de agosto de 2003, M.P. DR. JAIME CORDOBA TRIVIÑO



Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013**  
**Ley 1708 de 2014**

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes- art. 376 ley 599 de 2000 - Código Penal. "El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia...", este supuesto de hecho se deriva del comportamiento de una de las personas que habitaban el inmueble concretamente Elder Julián toro Castaño hijo de la aquí afectada, lo que se desprende de las pruebas arimadas al plenario.

Ahora, en lo que respecta a la acción de extinción de dominio se observa que la Fiscalía considera hubo por parte de la propietaria del inmueble falta de diligencia, vigilancia y cuidado, incumpliendo el mandato constitucional del artículo 58 en cuanto la propiedad tiene una función social que implica obligaciones como tal y le es inherente una función ecológica.

## **6. CASO CONCRETO**

### **6.1. De la identificación del bien**

La presenta acción se adelanta respecto del siguiente bien inmueble:

Tipo de bien	Identificación	Dirección	titulares
Casa de habitación	Matrícula Inmobiliaria N° 018-93819	Calle 21 N° 46 A - 89	Luz Miriam Castaño Quintero C.C. 43.449.476

### **Descripción Cabidas y Linderos**

Un lote de terreno con casa de habitación situado en la Calle 21 N° 46 A 89, actual nomenclatura del Municipio de Marinilla Departamento de Antioquia, con una extensión aproximada de (42.9 Mts 2) y comprendido por los siguientes linderos: Por el frente con la Calle 21; por el costado izquierdo con Carlos Mario Acevedo; por el costado derecho con Mauro Zuluaga y por la parte de atrás con José Hernández. Folio de Matrícula Inmobiliaria Número 018-93819 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla.

### **6.2. De la configuración de la causal**

Recapitulando, como se indicó en acápite precedente, tuvo su génesis esta acción en la información suministrada por funcionario de la

Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013**  
**Ley 1708 de 2014**

Dirección Nacional de Estupefacientes, poniendo en conocimiento el inmueble ubicado en la calle 21° Nro. 46A-89 en el barrio La ciudadela del Municipio de Marinilla, Antioquia, al ser vinculado dentro de la estrategia TEMC – Tráfico de Estupefacientes en Menores Cantidades, liderada por la Policía Nacional en coordinación de la Fiscalía General de la Nación. Investigación penal radicada bajo la NUNC. 05 440 60 00340 2011 00020 por el delito de Tráfico, Fabricación o Porte de estupefacientes.

Lo pertinente ahora es valorar el material probatorio arrojado en las respectivas etapas y poder concluir si efectivamente se logró acreditar la causal endilgada por el ente acusador, tendiente a demostrar la destinación ilícita dada al bien inmueble objeto de discusión o si por el contrario se desvirtúa dicha pretensión en favor de la afectada.

Al respecto fue allegado al expediente carpeta de investigación donde versa informe de Policía Judicial, en el cual documenta información concerniente al allanamiento y registro practicado el 12 de mayo de 2011, ordenado por la Fiscalía Seccional 094 del Municipio de Marinilla<sup>17</sup>

Así mismo, se aportó sentencia condenatoria del señor Elder Julián Toro Castaño, por el delito, de tráfico fabricación o porte de estupefacientes bajo el verbo rector conservar.

Informe Policía Judicial del veinticinco (25) de febrero de 2016, sobre las actuaciones desarrolladas en virtud al decreto de pruebas, entre ellas, labores de vecindario, dentro del cual se estableció que en la actualidad el inmueble no ejerce actividad ilícita alguna, pero nada se adujo con relación a otras épocas, al respecto el informe señala "...Igualmente se realizan las labores de vecindario en el barrio Ciudadela donde se ubica el inmueble, para establecer si la residencia está siendo objeto de expendio de estupefaciente, pero desafortunadamente no se pudo establecer dado a que las personas de sus alrededores manifiestan que al momento el lugar no se dedican a la venta de estupefacientes ...".

Por otra parte, en declaración rendida por la señora Luz Miriam Castaño Quintero<sup>18</sup>, expresó no tener conocimiento que su hijo se dedicara al expendio de sustancias alucinógenas, éste simplemente le confesó que era consumidor y si bien en algún momento llegó a venderla, fue a un compañero del colegio para comprarse unos tenis, pero que no lo hizo al interior de su vivienda.

<sup>17</sup> Folios 4 al 49 C. Org. 1.

<sup>18</sup> Folios 179 al 182 C. Org. 1.



Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013**  
**Ley 1708 de 2014**

También hizo referencia al hecho de ser madre cabeza de familia, con dos hijos más por quienes responde, razón por lo cual trabaja todo el día y regresa en las noches, sin que hasta el momento de los hechos hubiese presenciado algo extraño por parte su hijo o de algún tipo de relaciones con personas extrañas que generaran su sospecha. El cuidado de su hijo menor lo encargaba a una vecina y el mayor permanecía en el día en compañía de su otro hermano.

Así mismo indicó Elder Julián Toro Castaño<sup>19</sup>, hijo de la Luz Miriam, no haber utilizado el inmueble de propiedad de su madre para la venta de drogas, admitiendo haber sido consumidor y en algún momento llegado a venderla, pero lo hizo a un compañero del colegio para ganar dinero y comprarse unos tenis, expresa que su madre no tenía conocimiento de la droga incautada en la vivienda y reconoce que él cómo hijo le falló, pero que ella, su madre, no es responsable de tal actividad.

Por su parte, la afectada por medio de apoderado judicial presentó oposición, detallando su actividad económica y la forma en que realiza sus labores en condición de madre cabeza de familia, la forma como debe organizarse para poder trabajar dignamente y no poner en peligro el bienestar de sus hijos, su manera de cubrir todos los gastos que genera un inmueble, esto es, servicios públicos e impuesto predial, aunado el pago del crédito hipotecario realizado para la compra de este, dada su capacidad económica.

Por último, resalta que no tenía conocimiento de la droga hallada en su vivienda, la cual su hijo la tenía allí sin su consentimiento, resalta que siempre les ha enseñado a ser responsables y a trabajar con honestidad.

Igualmente resaltó en declaración rendida en etapa de juicio, tener una buena relación con sus vecinos, ser la persona que hasta la fecha ha sufragado la educación, alimentación y demás gastos de sus hijos, estar siempre pendiente que las actividades dentro de su hogar no afecten a la sociedad.

Con relación a sus horarios adujo permanecer en su casa a partir de las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana que se va a laborar. En el día permanecen en el inmueble sus dos hijos Jhonatan y Julián Toro Castaño, porque el menor estudia en la mañana.

<sup>19</sup> Folios 175 al 177 C. Org. 1.

Ejercía el control del inmueble por medio de su hijo al vincularlo en la nocturna para facilitar que su hijo mayor estuviera al cuidado del menor en el día, mientras regresaba, además contaba con una vecina que le ayudaba con la comida del menor y ésta tenía su número celular para cualquier contratiempo. Por último, expresó que dormía en el tercer piso y la droga hallada fue ubicada en el segundo piso donde se encuentran ubicadas las habitaciones de sus hijos.

Con relación a las declaraciones de la afectada y su hijo, resultan para el despacho creíble la versión según la cual el hecho de conservar la sustancia estupefaciente al interior del bien inmueble fue un acto oculto del cual nunca se enteró la señora Luz Miriam Castaño, tampoco se allegó al proceso prueba que conduzca a acreditar que el lugar era un expendio de alucinógenos, lo que resultaba elemental para demostrar la configuración de una causal de destinación.

Por otra parte con respecto a COMFAMA, tercero afectado, con relación al crédito con garantía hipotecaria a cargo de la señora Luz Miriam para la adquisición del inmueble, no se presentó oposición alguna, sin embargo, mediante escrito presentado por la Representante Legal, se indicó que la caja no tiene ningún interés en la propiedad objeto de discusión, toda vez que a la fecha no existen créditos pendientes de pago a cargo de la afectada<sup>20</sup>

Si bien la Fiscalía consideró se configura la causal 3 del artículo 2 de la ley 793 de 2002, modificada por la ley 1453 de 2011 y solicita se decrete la extinción del derecho de dominio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N° 018-93819, lo cierto es, que para el despacho no procede la extinción del dominio del referido bien inmueble, por considerar que la prueba arrimada al proceso se quedó corta a fin de estructurar en grado de certeza la configuración de la causal que se invoca. Y contrario a ello, es más sólida la prueba que conduce a demostrar que la propietaria no fue quien destinó, ni toleró la ejecución de una actividad ilícita, como tampoco violó su deber de vigilancia y control sobre la propiedad, en contravía del mandato establecido en el artículo 58 de la Constitución Nacional.

En primer lugar, ha de indicarse que en el proceso aparece demostrado que efectivamente al interior del bien inmueble se conservaba una sustancia estupefaciente, concretamente cannabis, sin embargo, brilla

<sup>20</sup> Folios 43 y 44 C. Org. 2.



Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013**  
**Ley 1708 de 2014**

por su ausencia prueba que establezca el fin de comercialización del estupefaciente, dándole destino al bien para tal cometido.

Ha de recordarse que la investigación se originó por razón de la información obtenida de una fuente anónima que daba cuenta que en ese inmueble se vendía droga, en horas de la tarde y noche, por lo cual la Fiscalía ordenó una diligencia de allanamiento que culminó con el hallazgo de 471 gramos de marihuana, tal como se puso de presente en el informe ejecutivo FPJ-3<sup>21</sup>, en la orden de allanamiento y registro emanada de la Fiscalía Seccional 094 del Municipio de Marinilla Antioquia, en el acta de incautación de elementos y el informe de investigador de campo FPJ 11<sup>22</sup>

No obstante, no se realizaron actividades investigativas tendientes a confirmar y demostrar que el inmueble efectivamente era utilizado como expendio de estupefacientes, lo cual no puede ni inferirse, ni suponerse del simple hallazgo de las mismas.

Si bien existe libertad probatoria, además de los métodos y medios de investigación que pueda coordinar la fiscalía con su grupo de policía judicial en desarrollo del programa metodológico, lo cierto es, que en este caso, no se aportaron medios de prueba idóneos para acreditar los fines de venta y la destinación del inmueble para tal fin, verbi gracia, seguimiento a personas, labores de vecindario, agente encubierto, entrevistas a consumidores o vecinos del sector, álbum fotográfico, entre diferentes medios de prueba que estructurarán adecuadamente como garantía de un debido proceso la causal que se invoca.

Se reitera, en este caso el ente acusador recaudó la información de una fuente anónima que cita en el informe ejecutivo, pero sin que se allegará prueba al proceso que permitiera realizar una valoración adecuada de la misma.

Si el fin del proceso de extinción de dominio consiste en definir si procede la pérdida, a favor del Estado, de los derechos reales, principales o accesorios, sobre bienes de origen o destinación ilícita; debe adecuarse al debido proceso, al ser la propiedad un derecho de rango constitucional debe estar revestido de garantías fundamentales y contar con prueba que demuestre en grado de certeza la estructuración de una causal establecida por la ley.

<sup>21</sup> Folio 16 C. Org. 1

<sup>22</sup> Folios 16 al 32 C. Org. 1

Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013  
Ley 1708 de 2014**

Por lo cual, es claro que la Fiscalía no halló argumento diferente para atribuirle negligencia y descuido a la afectada que el hecho de ausentarse durante la jornada diurna, encontrándola como responsable de faltar a la función social y ecológica que le es inherente para con su propiedad, y así mismo, con respecto al cuidado de sus hijos.

La anterior Afirmación desconoce la protección de trato diferencial a mujer cabeza de familia, conforme lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución, desarrollado por el artículo 2° de la ley 82 de 1993, factores que debieron tomarse en cuenta, previo argumentar la situación del entorno familiar de la afectada, análisis que merece un título aparte.

Era deber del ente Fiscal acreditar en debida forma la falta a la función social al ser el argumento principal para petitionar requerimiento de extinción sobre dicha propiedad, por cuanto, si bien no está en discusión el hecho generador de esta investigación, si lo era demostrar que efectivamente allí se dedicaban al expendio de sustancias alucinógenas, establecer entre otras: de parte de quien, desde cuando, durante qué periodo se vendían allí estupefacientes; para así predicar la falta de cuidado de la propietaria del bien.

Más aún, teniendo presente que la sentencia de condena en contra del señor Elder, lo fue por el delito de Tráfico Fabricación o Porte de Estupefaciente, en la modalidad de conservar, pues se no adujo allí se tratara de estupefacientes con fines de distribución o venta, hecho que tampoco fuera probado en el proceso de extinción de dominio.

De ahí qué, no puede olvidar la Fiscalía que si bien la carga dinámica de la prueba busca dejar en cabeza de quien este en mejor condición de probar un hecho, la carga de aportar la prueba al proceso, no quiere decir esto, que no esté dentro de sus obligaciones desvirtuar la presunción constitucional de la buena fe, con relación a las actuaciones de los afectados.

Al respecto la falta a la función social que se aduce en resolución de requerimiento no pasó de ser una afirmación no probada, omitiendo que en materia de extinción del derecho de dominio tiene aplicación la teoría de la carga dinámica de la prueba, según la cual, quien está en mejores condiciones de demostrar determinada circunstancia, debe probarla. Al respeto a dicho la Corte Constitucional "no obstante este derecho de oposición a la procedencia de la declaratoria de extinción implica un comportamiento dinámico del afectado, pues es claro que no puede oponerse con sus solas manifestaciones. Es decir las negaciones



Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013**  
**Ley 1708 de 2014**

indefinidas, en el sentido que no es ilícita la procedencia de los bienes, no lo exige del debe de aportar elementos de convicción que desvirtúen la inferencia, probatoriamente fundada, del Estado en cuanto a esa ilícita procedencia..."<sup>23</sup> cursiva fuera de texto.

### 6.2.1 Enfoque Diferencial

Es necesario propender por la incorporación de enfoque diferencial que dé paso a la garantía de los derechos humanos. Debe identificarse y reconocerse entre otras, diferencias según el género o la condición especial de la mujer, sus implicaciones en términos de familia y condiciones de vida. Así buscar la reivindicación y legitimación de las diferencias desde una perspectiva de los derechos fundamentales.

Se trata aquí de generar condiciones de equidad frente a distintas dimensiones de discriminación, equidad de género que implica la posibilidad de un tratamiento diferencial, cuando se adviertan situaciones de vulnerabilidad, en este caso tratándose de mujer cabeza de hogar, quien es sujeto de especial protección por mandato constitucional, según el artículo 13 superior y por la ley 82 de 1993.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Corte Constitucional sentencia C-740 del 28 de agosto de 2003, ponente Doctor Jaime Córdoba Triviño – como lo ha expuesto la jurisprudencia contencioso administrativa, "el deber de probar un determinado hecho o circunstancia se impone a la parte que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo, han cuando no lo haya alegado o invocado" Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 3 de mayo de 2001. En el mismo sentido la Sentencia del 24 de enero de 2002.

<sup>24</sup> **LEY 82 DE 1993** (noviembre 3) Diario Oficial No. 41.101, de 3 de noviembre de 1993. Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia.

**ARTÍCULO 1o.** La familia es núcleo fundamental e institución básica de la sociedad; se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

**ARTÍCULO 2o. JEFATURA FEMENINA DE HOGAR.** <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> "Para los efectos de la presente ley, la Jefatura Femenina de Hogar, es una categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, económicos, culturales y de las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición y condición en los procesos de reproducción y producción social, que es objeto de políticas públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y sectoriales de la sociedad civil.

En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitados para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar..."

**ARTÍCULO 3o. ESPECIAL PROTECCIÓN.** <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1232 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> El Gobierno Nacional establecerá mecanismos eficaces para dar protección especial a la mujer cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales, procurando establecer condiciones de vida dignas, promoviendo la equidad y la participación social con el propósito de ampliar la cobertura de atención en salud y salud sexual y reproductiva; el acceso a servicios de bienestar, de vivienda, de acceso a la educación básica, media y superior incrementando su cobertura, calidad y pertinencia; de acceso a la ciencia y la tecnología, a líneas especiales de crédito y a trabajos dignos y estables.

Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013**  
**Ley 1708 de 2014**

En el caso que nos ocupa, se destaca de la motivación de Resolución de requerimiento "...De las anteriores declaraciones se colige diáfananamente que en el presente caso nos encontramos ante una situación de descuido de la función social y ecológica sobre el inmueble, dado que la señora Luz Miriam Castaño Quintero, madre cabeza de familia, pese a su gran esfuerzo por proveerles una vivienda digna y conseguir el sustento para educar a sus hijos, descuidó como ella misma lo reconoce en su declaración, a sus hijos, y en consecuencia las actividades por ellos emprendidas dentro del inmueble.

Concretamente, se observa que el exigente horario laboral al que estaba sometida la propietaria del inmueble, así como el horario de estudios (nocturno) de su hijo Elder Julián, pudieron haber sido propicios para que ella desconociera las actividades a las que se dedicaba su hijo, no obstante, ello no es óbice para que en cumplimiento de sus deberes como madre y como propietaria del bien ejerciera acciones de vigilancia y control sobre los actos de su hijo.

Lo anterior, por cuanto si bien es cierto y de acuerdo con su declaración, su esfuerzo laboral se encaminaba a procurar el bienestar de sus hijos, es precisamente que en procura de ese cometido, debió interesarse por conocer las actividades que concretamente realizaba cada uno de ellos.

Nótese que la forma de cómo fue encontrada la sustancia estupefaciente, esto es, empaquetada en bolsas individuales con cierres herméticos, permite avizorar y reafirmar la versión de Elder Julián en el sentido de que la misma era para su consumo y "venta a conocidos" luego, la señora Castaño, en cumplimiento de sus deberes como madre, si tendría que haberse percatado de un comportamiento, de un olor, de una actitud extraña, máxime si se tiene en cuenta que en su declaración afirmó que luego de regresar del trabajo compartía algunos momentos con ellos.

Se evidencia así, un descuido por parte de la madre que se concreta en la omisión de vigilar las actividades desplegadas por su hijo Elder Julián, que aunque para la época de los hechos ya era mayor de edad, vivía en el inmueble de su propiedad, siendo esa omisión del deber de cuidado lo que permitió que en su inmueble se conservara marihuana, y según el dicho de su hijo, la venta a algunos conocidos, situación que categóricamente encuadra con la causal endilgada por la Fiscalía General de la Nación en la resolución de dio inicio a la presente actuación...". *Cursiva fuera de texto.*

Considera el despacho, que de asumirse la postura pregonada por la Fiscalía, se desconoce la aplicación de un enfoque diferencial que como mujer y en su condición de madre cabeza de hogar tiene la afectada, ya que contrario a reconocerse que efectivamente producto de su condición particular y necesidad de cumplir una extensa jornada laboral le está vedado un control absoluto sobre la destinación dada al inmueble, sin que se constituya su ausencia temporal en descuido o falta a la función social, se ha valido sí la Fiscalía en Resolución de Requerimiento de la apremiante posición de la propietaria del bien para endilgarle una responsabilidad por conducta omisiva que repercute en la pérdida de su patrimonio, tesis no asumida ni compartida por la judicatura<sup>25</sup>.

<sup>25</sup> Declaración de Beijing (1995). Los Estados firmantes se declaran decididos a promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo, en interés de toda la humanidad. Se comprometen sin reservas a combatir estas limitaciones y obstáculos y a promover así el adelanto y la potenciación del papel de la mujer en todo el mundo, y convenimos en que esta tarea exige una acción urgente, con espíritu decidido, esperanza, cooperación y solidaridad, ahora y en los albores del nuevo siglo.



Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013**  
**Ley 1708 de 2014**

De la prueba recaudada se puede concluir que si la señora Luz Miriam Castaño Quintero, ha de ausentarse del bien es precisamente en cumplimiento de su jornada laboral para así cumplir sus obligaciones que como tal su condición de madre cabeza de hogar le impone para con sus hijos, garantizando su bienestar y condiciones de vida digna; por tanto, tampoco puede llegarse al extremo de considerar por un lado altruista su actuar como madre y de otro lado negligente respecto del cuidado del bien, cuando una y otra situación están íntimamente relacionados y no pueden ser valorados aisladamente.

No resulta de recibo lo sustentado por la Fiscalía cuando afirma que en cumplimiento de sus funciones como madre la afectada tenía la obligación de haberse percatado de algún hecho extraño o anormal, bien fuera por la actitud de su hijo, por olor a estupefaciente; y al no advertirlo le resultare imputable una actitud negligente, descuidada donde ha faltado a su función ecológica y social.

Conforme lo anterior valga decir que una cosa es la posibilidad que se tuvo en advertir dicho evento, incluso estando amparada como madre en un derecho constitucional del artículo 33, advirtiéndolo, ello no la exime de la responsabilidad que pudiere asumir en el proceso de extinción de dominio y cosa distinta es exigirle que estaba obligada a percatarse de un hecho oculto y que al no descubrirlo deba en consecuencia asumir la pérdida de su patrimonio.

No resulta descuidado su comportamiento y actuar cuando sus hijos en ausencia de su madre quedan al cuidado de su hermano mayor de edad y adicionalmente, una vecina del sector presta la asistencia para proveer sus alimentos.

Imposible suponer que la madre quien se ausenta para laborar y responder por sus hijos, deba estar al tanto de cada detalle al interior del bien.

Está probado que la afectada desaprueba que su hijo haya sido consumidor de sustancias estupefacientes, pues no hace parte de la formación ética y moral impartida; y que acto fue ocultado, por ende le era desconocido y no otorgó consentimiento alguno.

La realidad descrita conlleva inevitablemente a la posibilidad de tener algún descuido, ya sea en el ámbito laboral o familiar, pues se hace imposible tener un control absoluto sobre lo que ocurría en su bien.

Nótese con respecto a la responsabilidad asumida por la afectada que para el momento de los hechos, Elder Julián Toro Castaño, era mayor de edad, y por tal razón, era la persona encargada por Luz Miriam, para

Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013  
Ley 1708 de 2014**

velar por la protección y bienestar del inmueble y el de sus hermanos menores de edad, mientras ella cumplía su horario laboral.

Lo que implicaba un grado de responsabilidad que como persona mayor de edad, se le brindó, al no contar con la presencia de figura paterna, ni con los medios económicos para pagar los servicios de una empleada doméstica, debiendo como ocurre en muchos hogares Colombianos que repartirse las actividades del hogar.

Aunado a ello, teniendo de presente el principio constitucional de solidaridad como obligación, deber y derecho fundamental, que tenía Elder para con su familia, que contempla lo siguiente:

*"La solidaridad envuelve un criterio de fuerza ética y moral haciendo que la coincidencia humana resista de un modo inimaginable ante los desafíos que enfrentan una sociedad en el día a día.*

*La solidaridad como principio valor, norma y derecho, hace del hombre solidario, un ser que este inspirado en el deseo e intención de ser siempre útil a la sociedad en que este.*

*La solidaridad como valor, es un fin al que todas las sociedades deben llegar, como derecho, se circunscribe en las obligaciones del Estado; y como principio, rige toda producción y aplicación de las normas existentes en un orden jurídico.*

*Así mismo, en cumplimiento del deber de solidaridad todos los hombres sin exclusión alguna deben de velar en aras del bien común, significando además que el interés general prevalece sobre el interés particular."*<sup>26</sup> *Cursiva del despacho.*

Lo anterior, para significar que no se vislumbra una conducta lesiva por parte de la afectada, por cuanto sus actos demuestran que ha actuado conforme sus capacidades, puesto que no dejó su propiedad en manos de persona desconocida, ni a su suerte, se confió de la labor encomendada a su hijo Elder, persona mayor de edad, que no requería de cuidado personal, tal como lo prevé el numeral 3 del artículo 314 y el artículo 339 del Código Civil.

Si bien, éste abusó de esa confianza brindada, al ocultar la sustancia estupefaciente al interior de su vivienda, la cual resultó imperceptible por la afectada, a causa de esto, no puede el Estado juzgarla al pretender exigirle un cuidado especial más allá de posible, que se le exige al buen padre de familia.

Así las cosas, estando acreditada las circunstancias en las que se desarrolló la actividad ilícita, sin la autorización de la propietaria ni con omisión consiente de incumplir la obligación constitucional, el Despacho

<sup>26</sup> <http://derechoshumanosuniversalesdefensa.blogspot.com.co/2013/02/la-solidaridad-como-obligacion-deber-y.html>



Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013**  
**Ley 1708 de 2014**

declarará la no procedencia de la acción de extinción de dominio objeto de debate, igualmente se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares decretadas por la Fiscalía, tales como, embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.

Para tal efecto, se ordenará oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla – Antioquia, y así mismo se oficiará comunicando esta decisión al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado – FRISCO.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**

#### **RESUELVE**

**PRIMERO: No declarar la extinción del derecho de dominio del inmueble con matrícula inmobiliaria Nro. 004-38706**, ubicado en la Calle 21 No 46 A 89 del Municipio de Marinilla Antioquia, de propiedad de la señora Luz Miriam Castaño Quintero, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

**SEGUNDO: ORDENAR** la cancelación de las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo decretadas por la Fiscalía sobre el bien inmueble.

**TERCERO: OFÍCIESE con** destino a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla – Antioquia; a su vez ofíciese al Fondo para la Rehabilitación Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado – FRISCO – para proceder con la entrega material del bien a su propietaria.

**CUARTO: ORDENAR** la cancelación del embargo y consecuente suspensión del poder dispositivo ordenado por la Fiscalía Delegada en este proceso, respecto del bien al que se le extingue el derecho de dominio en el numeral **PRIMERO** de esta providencia. Para tal efecto, **OFÍCIESE** a la Oficina de Instrumentos Públicos de Marinilla Antioquia, para que proceda a levantar la medida cautelar, e inmediatamente, efectúe la inscripción de esta sentencia de Extinción de Dominio a favor

Radicado: 05000 31 20 001 2016 00008  
Afectado: Luz Miriam Castaño Quintero  
Decisión: Niega procedencia de extinción de dominio

**Sentencia N° 013**  
**Ley 1708 de 2014**

del Estado.

**QUINTO: LÍBRENSE** las comunicaciones de ley.

**SEXTO:** Contra esta decisión procede únicamente el recurso de apelación, conforme lo establecido en los artículos 65 numeral 1° y 147 de la Ley 1708 de 2014.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**JUAN FELIPE CÁRDENAS RESTREPO**  
**JUEZ**



1061/2019  
11/26/2019  
16

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ  
SALA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

**Magistrada Ponente: MARÍA IDALÍ MOLINA GUERRERO**

Radicación	: 050003120001201600008 01
Procedencia	: Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia
Afectado	: Luz Mirian Castaño Quintero
Asunto	: Extinción de Dominio
Denunciante	: De oficio
Motivo	: Consulta
Decisión	: Revocatoria
Acta de registro n.º.	: 030 de 20 de marzo de 2019
Acta de aprobación n.º.	: 071 de 4 de julio de 2019
Ciudad	: Bogotá, D. C.

**ASUNTO POR DECIDIR**

Revisar a través del grado jurisdiccional de consulta, la sentencia proferida el 24 de julio de 2017, por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, mediante la cual no declaró la extinción de dominio sobre el inmueble ubicado en la calle 21 número 46 A - 89, barrio Ciudadela Artesanal del municipio de Marinilla (Antioquia), identificado con matrícula inmobiliaria 018-93819 y cédula catastral 440010060130000700000000, propiedad de **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO**.

**HECHOS**

El 12 de mayo de 2011, funcionarios de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad Básica de Investigación Criminal de la SIJIN asentados en el municipio de Marinilla (Antioquia), en

cumplimiento de una orden impartida por la Fiscalía 94 Seccional de dicha población, allanaron el inmueble ubicado en la calle 21 número 46 A - 89, barrio Ciudadela Artesanal, pues, según información de la ciudadanía, en ese lugar se almacenaban y comercializaban estupefacientes.

En dicha diligencia la Fuerza Pública halló, en diferentes sitios del bien, 471 gramos de marihuana cuidadosamente dosificada y empaquetada en bolsas plásticas con sello hermético, lo que motivó la captura, en situación de flagrancia, de ELDER JULIÁN TORO CASTAÑO, quien, a la postre, fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Marinilla, a treinta y dos (32) meses de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes, luego de aceptar negociadamente su responsabilidad penal.

### **ANTECEDENTES PROCESALES**

1- A través del oficio S-2012-031758/SIJIN-GIDES 73.32, el jefe de la Unidad Investigativa de Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la SIJIN del Departamento de Policía de Antioquia, presentó el inmueble objeto de la diligencia de allanamiento a la Fiscalía General de la Nación para lo pertinente.

2- La actuación correspondió por reparto a la Fiscalía 21 Especializada adscrita a la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, despacho que, mediante resolución de 31 de octubre de 2012, dio inicio al trámite procesal, por virtud de la causal 3ª del artículo 2º de la Ley 793 de 2002, sobre el predio identificado con matrícula inmobiliaria 018-93819 y cédula catastral 440010060130000700000000, ubicado en la calle 21 número 46 A - 89, barrio Ciudadela Artesanal del



municipio de Marinilla (Antioquia), propiedad de **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO**, decretando subsecuentemente el embargo, secuestro y la suspensión del poder dispositivo del bien<sup>1</sup>.

3- La resolución de inicio se notificó personalmente al Agente del Ministerio Público<sup>2</sup>, a la afectada<sup>3</sup> y al apoderado de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (COMFAMA) en calidad de tercero interesado<sup>4</sup>.

4- El secuestro del inmueble vinculado a esta actuación se materializó el 18 de diciembre de 2012, data en que fue enterado el representante de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes del inicio del trámite procesal<sup>5</sup>, quien dispuso que la edificación fuera entregada en depósito provisional a la Unión Temporal Inmobiliaria de Antioquia.

5- Ante la imposibilidad de notificar a los terceros, personas indeterminadas y demás titulares de derechos reales principales o accesorios, para que comparecieran al proceso, el 15 de mayo de 2014 se ordenó fijar edicto emplazatorio, el cual fue publicado en un diario de circulación nacional<sup>6</sup> y, comoquiera que éstos no concurrieron, el 10 de junio siguiente les fue designada curadora *ad litem*, a quien se le notificó la resolución de inicio el 28 de julio<sup>7</sup> y presentó escrito de oposición el 12 de agosto de aquel año<sup>8</sup>, en tanto que el memorial del apoderado de la afectada fue extemporáneo<sup>9</sup>.

---

<sup>1</sup> Folio 52 a 60, C. O. 1

<sup>2</sup> Folio 60 reverso, *ibidem*

<sup>3</sup> Folio 68, *idem*

<sup>4</sup> Folio 109, *idem*

<sup>5</sup> Folios 64 a 67, *idem*

<sup>6</sup> Folios 116, 117 y 120, *idem*

<sup>7</sup> Folio 130, *idem*.

<sup>8</sup> Folios 133 y 134, *idem*

<sup>9</sup> Cuaderno posición 1 y folio 139 C. O. 1

6- Mediante Resoluciones 550 de 22 de julio y 558 de 15 de agosto, ambas de 2014, la directora de la Unidad de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio reasignó el diligenciamiento a la Fiscalía 34 Delegada<sup>10</sup>, despacho que, en proveído de 9 de noviembre de 2015 dio apertura a la fase probatoria; una vez agotado este trámite<sup>11</sup>, se surtió el respectivo traslado para que los intervinientes alegaran de conclusión<sup>12</sup>.

7- El 21 de julio de 2016, el Ente Persecutor emitió resolución de procedencia de extinción de dominio sobre el bien citado con fundamento en la causal 3ª del artículo 2º de la Ley 793 de 2002, al considerar que la valoración conjunta de los medios probatorios evidenciaba que fue utilizado para la ejecución de actividades ilícitas -almacenamiento, comercialización y expendio de sustancias estupefacientes-, con lo cual se incumplió con la función social y ecológica inherente al derecho de propiedad

En relación con el aspecto subjetivo de la causal invocada, cuestionó que **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO** no hubiera ejercido un adecuado control sobre el predio y ese desinterés, permitió que se realizaran los comportamientos indicados en precedencia, los cuales fueron perpetrados por su propio hijo<sup>13</sup>.

8- La etapa de juicio correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia y comoquiera que la Ley 1708 comenzó a regir desde el año 2014, dicho despacho adecuó el procedimiento a las previsiones de este nuevo cuerpo normativo, por lo que asumió el conocimiento del asunto mediante providencia de 2 de noviembre de 2016<sup>14</sup>,

---

<sup>10</sup> Folio 136, C. O. 1

<sup>11</sup> Folios 141 a 182, ibídem

<sup>12</sup> Folios 183, ídem

<sup>13</sup> Folios 213 a 223, cuaderno original Fiscalía

<sup>14</sup> Folios 14 y 15 C. O. 2



ordenando su notificación en la forma establecida en el artículo 138 de la Ley 1708 de 2014<sup>15</sup>.

9- Nuevamente se fijó emplazamiento, esta vez en los términos del artículo 140 del Código de Extinción de Dominio, el cual se publicó en radio, prensa y en las portales web de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial del Poder Público, prosiguiendo la actuación con la intervención del Ministerio Público por cuanto al proceso no concurrieron personas diferentes a la aquí afectada.

10- En auto de 21 de marzo de 2017<sup>16</sup> el despacho cognoscente se pronunció en torno a las solicitudes probatorias, decretando unas y rechazando otras; agotado este trámite, el 5 de mayo siguiente se corrió traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión<sup>17</sup>, solo lo hizo **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO** a través de su apoderado<sup>18</sup>.

### **SENTENCIA CONSULTADA**

El 24 de julio de 2017, el juzgado en mención no extinguió el derecho de dominio que, sobre el inmueble ubicado en la calle 21 número 46 A – 89, barrio Ciudadela Artesanal del municipio de Marinilla (Antioquia) e identificado con matrícula inmobiliaria 018-93819 y cédula catastral 440010060130000700000000, ostenta **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO**.

Sostuvo haberse demostrado que en la aludida edificación, miembros de la Policía Nacional hallaron 471 gramos de marihuana, pertenecientes a **ELDER JULIAN TORO CASTAÑO**.

---

<sup>15</sup> Folios 18, 20 y 21, ibidem

<sup>16</sup> Folios 45 a 47, ídem

<sup>17</sup> Folio 61, ídem

<sup>18</sup> Folios 63 a 72, ídem

No obstante, consideró que no se configuraba la causal extintiva invocada por la Fiscalía General de la Nación comoquiera que, en primer lugar, la sustancia incautada no estaba siendo destinada para la comercialización, sino para el consumo de su propietario y, segundo, la afectada no fue negligente en el cuidado y vigilancia del inmueble, pues de sus manifestaciones se desprende que tenía largas y extenuantes jornadas laborales que le impedían conocer las actividades desarrolladas por sus hijos e inclusive convivir con ellos.

Aseguró el *a quo* que, ELDER JULIÁN, descendiente de **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO**, a quien se le incautó el estupefaciente y resultó condenado por la justicia ordinaria penal, fue enfático en aseverar que su progenitora no tenía conocimiento de lo que hacía, en la medida que siempre le ocultó que conservaba la marihuana, para su consumo personal.

Resaltó la condición de «*madre cabeza de hogar*» de la afectada, para indicar que se encuentra amparada por la protección constitucional reforzada que ofrecen el artículo 43 de la Carta Política y la Ley 82 de 1993 y en ese sentido, dijo que, por una parte, no consintió la ejecución de actividades ilícitas en su predio y, por otra, actuó «*conforme a sus capacidades, puesto que no dejó la propiedad en manos de persona desconocida*», sino que, por la necesidad que tenía de desplazarse a su trabajo, la puso al cuidado de su hijo, quien defraudó esa confianza.

Como consecuencia, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares impuestas sobre el inmueble y su devolución a la propietaria inscrita<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Folios 73 a 84, C. O. 2



2

## CONSIDERACIONES DE LA SALA

### **1.- Competencia.**

De conformidad con los artículos 33, 147 y 215 de la Ley 1708 de 2014 y los Acuerdos 6852, 7335 y 7336 de 2010, 7718 y 8724 de 2011 y 9165 de 2012, emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura, es competente esta Sala para desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia de 24 de julio de 2017 en que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia no declaró la pérdida del derecho de propiedad a favor del Estado, sobre el inmueble, ubicado en la calle 21 número 46 A - 89, barrio Ciudadela Artesanal del municipio de Marinilla (Antioquia), identificado con matrícula inmobiliaria 018-93819 y cédula catastral 440010060130000700000000, propiedad de **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO**.

### **2.- De la Extinción del Derecho de Dominio.**

La acción de extinción del derecho de dominio es de origen constitucional pues se encuentra consagrada el artículo 34 de la Carta Política; de carácter público, en razón a que a través de ella se tutelan intereses superiores del Estado como el patrimonio y el tesoro público y la moral social; es de contenido patrimonial, porque recae sobre cualquier derecho real e implica la pérdida de la titularidad del bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido, tal como se extrae del contenido del artículo 17 de la Ley 1708 de 2014.

También debe resaltarse que esta acción, conforme lo señala el artículo 18 *ibídem*, es autónoma e independiente en relación con otras, en especial frente a la penal, ya sea que se hubiese iniciado simultáneamente, o que de aquélla se hubiere desprendido, pues

no se trata de una pena ni del juicio de responsabilidad que pueda atribuírsele al afectado por actuaciones de carácter penal.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1708 de 2014, implica la pérdida, a favor del Estado, de la titularidad de los bienes sujetos a este trámite y sin ninguna contraprestación o compensación para el afectado, entre otras circunstancias, cuando los bienes *«hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas»*<sup>20</sup>, como acontece en el *sub júdice*, debiendo entenderse que éstas son las taxativamente señaladas en el artículo 1º del Código de Extinción de Dominio.

### **3.- Caso concreto.**

Corresponde a esta Corporación determinar si la sentencia en que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia se abstuvo de declarar la pérdida de la titularidad que **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO** ostenta sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 018-93819 y ubicado en el municipio de Marinilla (Antioquia), se encuentra ajustada a derecho.

Sea lo primero advertir que hay lugar a este análisis por vía del grado jurisdiccional de consulta, en atención a lo normado por el artículo 147 de la Ley 1708 de 2014, que indica:

**ARTÍCULO 147. Contradicción de la sentencia.** *Contra la sentencia sólo procederá el recurso de apelación interpuesto por los sujetos procesales o por los intervinientes, en el efecto suspensivo. Este será resuelto por el superior dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en el que el expediente llegue a su despacho. La sentencia de primera instancia que niegue la extinción de dominio y que no sea apelada, se someterá en todo caso a grado jurisdiccional de consulta.* (Resaltado fuera del texto)

<sup>20</sup> Ley 793 de 2002, artículo 2º numeral 3º, modificado por el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011



En el presente asunto, las razones por las cuales el Juez cognoscente no declaró la extinción de la propiedad, radicada en cabeza de **CASTAÑO QUINTERO**, sobre el bien inmueble aludido en precedencia básicamente estriban en el hecho de que la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar la configuración de la causal invocada para dar inicio a este trámite.

Según el *a quo*, aun cuando en la edificación fueron hallados 471 gramos de marihuana, lo cierto es que dicha sustancia pertenecía al hijo de la afectada, ELDER JULIAN TORO CASTAÑO, quien la destinaba para su consumo personal y no al expendio; además, las declaraciones recepcionadas dan cuenta que **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO** no tenía conocimiento de la actividad desarrollada por su descendiente, por cuanto permanecía por fuera del domicilio la mayor parte del día debido a sus largas y extenuantes jornadas laborales.

Procede entonces la Sala a examinar si la conclusión a la que llegó el juez de primer grado se fundamenta en las pruebas recaudadas en la actuación. Para ello, se verificará si se actualiza la causal contemplada en el numeral 3 del artículo 2º de la Ley 793 de 2002, invocada por la Fiscalía General de la Nación, para dar inicio al presente trámite procesal.

En primer lugar, deberá establecerse la naturaleza de la actividad desarrollada en el inmueble, y luego, determinarse si existió por parte de la propietaria, una adecuada custodia, vigilancia o administración o si, por el contrario, permitió, directa o indirectamente, que allí se llevaran a cabo comportamientos ilícitos que afectaron gravemente la moral social.

Previamente, es preciso rememorar que el bien objeto de este proceso está ubicado en el municipio de Marinilla (Antioquia), se identifica con matrícula inmobiliaria 018-93819 y corresponde a un lote de terreno de 42.9 mts<sup>2</sup>, en el que se encuentra construida una casa de tres plantas.

Sobre el aspecto objetivo, es decir, la destinación que se le estaba dando a la edificación, obra en el plenario el acta elevada por funcionarios de Policía Judicial, adscritos a la Unidad Básica de Investigación Criminal de la SIJIN, asentada en el municipio de Marinilla (Antioquia), referente al allanamiento realizado el 12 de mayo de 2011<sup>21</sup> y que da cuenta del hallazgo e incautación, en diferentes habitaciones del lugar, de una sustancia vegetal, aparentemente marihuana, que se encontraba cuidadosamente empaquetada en bolsas plásticas de cierre hermético.

Dicha sustancia fue sometida a las pruebas químicas de identificación y pesaje, a través de las que se confirmó que efectivamente se trataba de marihuana, alcanzando un peso neto de 471 gramos.

Por estos hechos, fue capturado ELDER JULIÁN TORO CASTAÑO, alias «Julio», hijo mayor de **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO**, propietaria del inmueble, y posteriormente condenado, por cuanto aceptó su responsabilidad penal a través de un preacuerdo celebrado con la Fiscalía General de la Nación.

Debe indicarse que se tuvo conocimiento de la actividad ilícita desplegada al interior de la propiedad, según se desprende de la

---

<sup>21</sup> Folios 13 a 15 C. O. 1



orden de allanamiento proferida por el Ente Fiscal<sup>22</sup>, porque *«una persona compradora de sustancia en esa residencia... hizo alusión a las personas como vendedoras de drogas ilícitas, actividad que realizan en horas de la tarde y la noche»*, amén de las constantes *«quejas ciudadanas que se han recepcionado en el comando de Policía local y en la propia SIJIN»*, información que fue confirmada con la diligencia de allanamiento y registro en la que se produjo los hallazgos y captura descritas en precedencia.

Para el Juez de primer grado, no se comprobó la materialidad de la causal invocada por la Fiscalía General de la Nación, por lo menos, en lo que tiene que ver con la fase objetiva, en la medida que no *«se allegó al proceso prueba que conduzca a acreditar que el lugar era un expendio de alucinógenos, lo que resultaba elemental para demostrar la configuración de una causal de destinación (sic)»*.

Según indicó el *a quo*, aun cuando se demostró que en la residencia de **CASTAÑO QUINTERO** se almacenaban sustancias psicotrópicas, *«brilla por su ausencia prueba que establezca el fin de comercialización del estupefaciente, dándole destino al bien para tal cometido»* y prueba de ello era que el descendiente de la afectada tan solo había sido condenado por la justicia penal, como portador del alcaloide.

Encuentra la Sala que esta primera deducción del juez cognoscente, resulta equivocada, básicamente por dos razones.

La primera, porque la información recaudada por el Ente Persecutor estatal, tanto en la actuación penal como en la de extinción, sí permiten arribar a la conclusión de que el

---

<sup>22</sup> Folios 9 a 12 C. O. 1

estupefaciente hallado en poder de ELDER JULIÁN TORO CASTAÑO, era comercializado.

Recuérdese que la sustancia fue encontrada cuidadosamente dosificada en pequeñas bolsas plásticas con sello hermético, es decir, lista para su distribución, circunstancia que sumada a las declaraciones recibidas al prenombrado y a su madre, confirman esta inferencia.

En efecto, ELDER JULIAN en la deponencia rendida el 10 de mayo de 2016<sup>23</sup> admitió ser el propietario del alcaloide y que lo destinaba no sólo para su consumo personal, sino para la venta. Veamos:

*(...) PREGUNTADO: Sírvase hacer una descripción de las circunstancias de tiempo modo y lugar de cómo se llevó a cabo la diligencia de allanamiento y registro efectuado por miembros de la Policía Nacional el 12 de mayo de 2011, en el inmueble ubicado en la calle 21 No. 46 A - 89, CONTESTÓ: Yo en ese momento yo estaba durmiendo y ellos estaban adentrando en el patio y por el balcón, los de la Sijín, ya entraron y me dijeron porque estaban allí, entonces yo ya los llevé entonces donde estaba la droga, y ya después ellos le tomaron fotos a todo y me leyeron los derechos y me hicieron registro de toda la casa y me llevaron capturado. PREGUNTADO: Conforme a su respuesta anterior por favor indíquele al Despacho por qué razón usted sabía o tenía conocimiento de dónde se encontraba la sustancia estupefaciente o la droga, CONTESTÓ: Porque era mía y yo la tenía escondida. PREGUNTADO: Indíquele por favor a este Despacho para qué fines usted tenía escondida esa droga, CONTESTÓ: Para consumo y yo en ese entonces estaba mal de dinero y les vendí a unos conocidos (...) (Subraya la Sala)*

Esta información es corroborada por la propia **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO** en la atestación vertida ante el juez de primer grado el 1º de junio de 2017<sup>24</sup>, en la que manifestó:

*(...) PREGUNTA: Dice su hijo Elder Julián en su declaración "entonces estaba mal de dinero y le vendía a unos conocidos", quiere indicarnos si usted sabe si esa venta que se hizo por parte de él, ocurrió en el bien*

<sup>23</sup> Folios 175 a 177 C. O. 1

<sup>24</sup> Folios 56 a 58 C. O. 2



*inmueble o no. RESPUESTA: Después de la declaración que hizo Elder Julián, el 10 de mayo de 2016, cuando leí que él le había vendido marihuana a un compañero de estudio, yo le pregunté usted dónde y por qué hizo eso y me dijo una noche estudiando en el colegio en mi descanso le vendí un poquito a un compañero porque yo necesitaba una plata para comprarme unos tenis, pero que sólo fue esa vez y no fue dentro de la casa (...)* (Subraya la Sala)

De manera pues que para esta Corporación, independientemente de la apreciación que el juez penal hubiere dado al material probatorio allegado a esa actuación, la cual fue replicada por el *a quo* en la sentencia que ahora se consulta, máxime cuando la responsabilidad penal fue negociada con la Fiscalía General de la Nación, emerge sin hesitación alguna que la marihuana hallada en poder de ELDER JULIÁN no tenía como único destino su consumo personal, sino también la distribución, a título oneroso, entre sus conocidos, resultando absolutamente irrelevante el lugar donde se hubiere llevado a cabo la negociación del alcaloide.

La segunda razón por la que esta Sala no comparte la conclusión a la que llegó el Juzgado de primer grado, gravita en torno a la independencia de la acción de extinción del derecho de dominio.

Como se sabe, este instrumento de rango constitucional, se ejerce independiente de cualquier otra acción, inclusive de la de naturaleza penal aun cuando de ella se hubiere derivado, de ahí que el funcionario jurisdiccional se encuentre revestido de autonomía para apreciar las pruebas que le sean traídas a su conocimiento, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y adoptar las decisiones que en derecho correspondan.

Así claramente lo indican los artículos 9º y 153 del actual Código de Extinción del Dominio:

*Artículo 9°. Las decisiones judiciales proferidas dentro del proceso de extinción de dominio serán la expresión del ejercicio de la función constitucional de administrar justicia. Los funcionarios judiciales serán independientes y autónomos.*

*(...)*

*Artículo 153. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.*

*El funcionario judicial expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada una de las pruebas que considere importantes para fundamentar su decisión.*

Sobre la independencia de esta acción, la Corte Constitucional en la sentencia C-740 de 2003<sup>25</sup> mediante la cual examinó la exequibilidad de la Ley 793 de 2002, indicó:

*Es una acción autónoma e independiente tanto del ius puniendi del Estado como del derecho civil. Lo primero porque no es una pena que se impone por la comisión de una conducta punible sino que procede independientemente del juicio de culpabilidad de que sea susceptible el afectado. Y lo segundo, porque es una acción que no está motivada por intereses patrimoniales sino por intereses superiores del Estado. Es decir, la extinción del dominio ilícitamente adquirido, no es un instituto que se circunscribe a la órbita patrimonial del particular afectado con su ejercicio, pues, lejos de ello, se trata de una institución asistida por un legítimo interés público.*

Así las cosas, la conclusiones a las que llegó jurisdicción ordinaria penal, en cuanto a la modalidad de la conducta atribuida a ELDER JULIÁN TORO CASTAÑO, en manera alguna atan a la de extinción de dominio, pues en virtud de los principios que acabaron de relacionarse, el funcionario judicial especializado se encuentra revestido de la facultad constitucional de administrar justicia y, desde esa perspectiva, puede darle al material probatorio un alcance o interpretación diferente al otorgado en escenario diverso, siempre y cuando no desborde los postulados de la sana crítica; por ello, contrario a lo expuesto por el juez de primera instancia, esta Sala considera que en el presente caso si se logró demostrar la comercialización del alcaloide.

---

<sup>25</sup> M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño

Ahora, aunque en gracia de discusión se llegase a admitir la posición del *a quo* de que la marihuana únicamente estaba destinada al consumo personal de ELDER JULIÁN TORO CASTAÑO, o que por lo menos, la Fiscalía General de la Nación no demostró la comercialización de la misma, dicha circunstancia en manera alguna podría alterar la conclusión a la que acaba de arribarse, toda vez que, tal como lo indica el numeral 2 del artículo 1º de la Ley 1708 de 2014, se entiende por actividad ilícita *«toda aquella tipificada como delictiva, independiente de cualquier declaración de responsabilidad penal, así como toda actividad que el legislador considere susceptible de aplicación de esta ley por deteriorar la moral social»*<sup>26</sup>.

En tal sentido, y reiterando la salvedad de la independencia de la acción de extinción del derecho de dominio respecto de la declaratoria de responsabilidad penal, se debe recordar que el delito consagrado en el artículo 376 del Estatuto Represor es de aquellos denominados de peligro abstracto y se actualiza con la incursión, por parte del sujeto activo, en alguno de los múltiples verbos rectores alternativos allí descritos, tales como transportar, llevar consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar o suministrar a cualquier título y sin permiso de autoridad competente, alguna de las sustancias estupefacientes *«que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas»*.

<sup>26</sup> En el mismo sentido, el numeral 3 del párrafo 2º del artículo 2º de la Ley 793 de 2002 indica que las actividades ilícitas son aquellas que *«impliquen grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son actividades que causan deterioro a la moral social, las que atentan contra la salud pública...»*



Para lo que interesa al presente trámite constitucional, resulta absolutamente irrelevante, como lo propuso el *a quo* e incluso el apoderado de la afectada en sus intervenciones, que el comportamiento desplegado por ELDER JULIÁN TORO CASTAÑO estuviera encaminado a la venta del alcaloide encontrado en su residencia, pues como acabó de verse, el solo hecho de conservarlo o almacenarlo en un lugar, sin estar autorizado para ello y en una cantidad que, en el caso puntual, excedió 24 veces la dosis mínima permitida, máxime cuando la sustancia encontrada, estaba debidamente porcionada y empacada para su distribución, como se reitera, lo admitió el hijo de la aquí, afectada, configura la conducta punible castigada por el ordenamiento jurídico.

Corolario de lo anterior, esta Corporación estima que la Fiscalía General de la Nación si acreditó la materialidad de la causal invocada al dar inicio a esta actuación extintiva.

Ahora bien, para el Juez de primer grado tampoco se logró demostrar que **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO** hubiese sido negligente en el ejercicio de las obligaciones de vigilancia y cuidado sobre su propiedad.

Así las cosas, debe la Sala verificar la configuración del aspecto subjetivo de la causal y, para ello, sea lo primero indicar que en Colombia, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política<sup>27</sup>, el derecho a la propiedad privada no es ilimitado, sino que puede ser afectado legítimamente por ciertas restricciones en su ejercicio, en cuanto que es de su esencia el cumplimiento de una función social – interés general – y ecológica – conservación de

---

<sup>27</sup> «La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad»

los recursos naturales y la protección del ambiente –, lo cual significa que a pesar de que la propiedad es un derecho individual y tiene el carácter de fundamental, constituyendo su núcleo esencial el goce y disposición, no es absoluto, pues se impone al titular del derecho de dominio el cumplimiento de ciertos deberes y obligaciones mínimos.

En reciente pronunciamiento<sup>28</sup>, el máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional dijo, en relación el concepto de propiedad privada, que:

*Esta Corporación ha establecido que se trata de un derecho subjetivo que se tiene sobre una cosa corporal o incorporeal, que faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella, siempre y cuando se respeten sus inherentes funciones sociales y ecológicas, encaminadas al cumplimiento de deberes constitucionales estrechamente vinculados con la noción de Estado Social de Derecho, como son la protección al medio ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos, la promoción de la justicia y la equidad y el interés general prevalente. Así, ha entendido la Corte, que es necesario que el ordenamiento jurídico adopte límites al derecho a la propiedad privada, que permitan la consolidación de los derechos del propietario con las necesidades de la colectividad, enmarcadas en la consecución de las citadas funciones que encuentran su fundamento en la Carta (artículos 1, 2, 58, 59 y 95 num. 1 y 8).*

Entonces, la inexploración del bien, o su aprovechamiento arbitrario, irracional y degradante, también supone, de hecho, el desconocimiento de los principios constitucionales a los que se viene haciendo referencia y dicha circunstancia, autoriza la extinción del derecho de dominio del propietario abusivo.

Por ello, en desarrollo del precepto superior, se expidió la Ley 1708 de 2014 que regula la acción extintiva consagrada en el artículo 34 de la Carta Política, que tiene como causal para declarar la pérdida del derecho real, entre otras, la utilización de los bienes «como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas»<sup>29</sup> entendidas estas como «toda aquella tipificada como delictiva,

<sup>28</sup> Corte Constitucional, sentencia C-410 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos

<sup>29</sup> Artículo 16, numeral 5 Ley 1708 de 2014

*independiente de cualquier declaración de responsabilidad penal, así como toda actividad que el legislador considere susceptible de aplicación de esta ley por deteriorar la moral social»<sup>30</sup>.*

En atención a las anteriores premisas, la Sala examinará si **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO** cumplió con las obligaciones constitucionalmente demandadas respecto del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 018-9381, esto es, si fue diligente en el cuidado, adoptando las medidas del caso tendientes a evitar que se le diera un uso contrario al ordenamiento jurídico.

De conformidad con las pruebas recaudadas, no hay lugar a duda de que la titularidad de la edificación radica en cabeza de la mencionada **CASTAÑO QUINTERO**, pues lo adquirió mediante Escritura Pública 4597 de la Notaría Tercera del Círculo de Medellín, a través de la cual se protocolizó la compraventa celebrada el 14 de diciembre de 2005 con JUANITA ÁLVAREZ GÓMEZ y VÍCTOR HUGO DUQUE ZULUAGA; de ahí que fuera aquélla ciudadana a quien le correspondía ejercer la obligación constitucional de velar por el cumplimiento de la función social de la propiedad.

Tal cual se dijo, para el *a quo* no le es atribuible **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO** negligencia alguna en el cuidado de la heredad, comoquiera que la extensa jornada laboral a la que se encontraba sometida, la obligaba a permanecer ausente del inmueble por amplios espacios de tiempo, tornando difícil vigilar que a su propiedad se le diera una correcta utilización y desconociendo por completo las actividades desplegadas por su hijo.

---

<sup>30</sup> Artículo 1º numeral 2, *ibidem*



31

Debe advertirse que sobre este particular punto, no fue allegado al expediente, por parte de la afectada, elemento cognoscitivo alguno que soportara probatoriamente su actividad laboral o la jornada que debía cumplir, únicamente se cuenta con las declaraciones que rindió en la fase inicial y el juzgamiento.

En ellas, **CASTAÑO QUINTERO** expuso que se desempeñaba como animadora en un parque de atracciones perteneciente a la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (COMFAMA), ubicado en el municipio de Rionegro (Antioquia)<sup>31</sup>, con una jornada laboral que iniciaba a las 7 de la mañana y culminaba entre las 6 y las 8 de la noche, por lo que debía salir de su residencia, aproximadamente, a las 6 o 6 y 30 de la mañana y regresaba a las 8 o 9 de la noche.

Aun cuando se aprecia que el tiempo que la afectada dijo emplear para el cumplimiento de sus labores es extenso, es lo cierto que esa sola circunstancia, aparte de no haber sido probada, en manera alguna la relevaba de ejercer adecuadamente su rol como propietaria del inmueble aquí vinculado, para evitar que se le diera un destino contrario al ordenamiento jurídico, porque así lo dispuso el constituyente al garantizar la propiedad privada previendo que este derecho se materializaría observando la función social y ecológica que les inherente.

Los argumentos defensivos, que hicieron eco en la decisión objeto de consulta, resultan insuficientes para justificar el hecho de que **CASTAÑO QUINTERO** no actuó de forma diligente en el cuidado de su heredad, en la medida que la necesidad de cumplir una extensa jornada laboral no le imposibilitaba vigilar qué hacían sus hijos, en especial ELDER JULIÁN, por lo menos en los momentos en que compartía con ellos, bien cuando regresaba a su residencia luego del trabajo o los días martes o miércoles que descansaba.

<sup>31</sup> Cuya distancia de Marinilla escasamente supera la media hora de camino.

En primer lugar, pues la sustancia vegetal fue hallada no solo en la habitación del joven, sino en las dos alcobas que componen el segundo piso de la edificación, debidamente porcionada y empacada, y, en segundo, porque no estaba escondida, por el contrario, se encontró en lugares de fácil acceso como, por ejemplo, debajo del camarote, sobre la cama, dentro de un clóset o en un bote de basura.

Ahora, de acuerdo con el acervo probatorio, ELDER JULIAN TORO CASTAÑO siendo menor de edad, fue sorprendido por la Fuerza Pública consumiendo estupefacientes, y aunque se desconoce si esa circunstancia le generó algún antecedente de tipo penal o policivo, es lo cierto que su madre, **LUZ MIRIAN**, era conocedora de la situación.

En efecto, en la declaración rendida por el prenombrado el 10 de mayo de 2016, ante la pregunta realizada por el Fiscal Instructor, respecto de si tenía otros antecedentes diferentes al que se le reporta por estos hechos, aseguró *«yo cuando era menor de edad a mí me cogieron con marihuana en la Unidad Deportiva, consumiendo, pero no sé si esto tenga antecedentes»*; igualmente se le indagó sobre el conocimiento que su progenitora tenía de ese evento, a lo que tajantemente respondió que sí.

Por su parte, la misma afectada admitió que sus dos hijos mayores le habían confesado haber *«recibido en el colegio (de) algunos compañeros, pero que ellos no les había gustado coger ese vicio, que solo lo habían hecho por ociosidad o por probar»*.

Entonces, la suma de las circunstancias indicadas en precedencia, ponen de relieve el descuido de **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO** en el control que, como propietaria y madre, debió

haber ejercido, toda vez que, por una parte, no era necesario que efectuara profundas pesquisas en su casa a efecto de darse cuenta de que se almacenaba marihuana en la edificación, por cuanto que, sólo le bastaba entrar a los dormitorios para percibir visual u olfativamente la sustancia y, por otra, tenía noticia de los antecedentes de consumo de su descendiente, lo que le imponía ejercer una vigilancia bastante más minuciosa de sus comportamientos, no solo para evitar que ejecutara acciones ilícitas en su heredad, que la pusieran en riesgo de perderla, sino también para prevenir que cayera en la drogadicción, y por ello, buen pudo haber indagado en su vecindario si alguna actividad extraña se desarrollaba en su inmueble cuando no se encontraba allí, pues como se sabe, la diligencia de allanamiento y registro se originó por las quejas que formulara la ciudadanía sobre la venta de estupefacientes en esa propiedad.

En ese orden de ideas, no puede decirse que, por el hecho de que la afectada permaneciera fuera del inmueble por su trabajo diario, le fuera absolutamente imposible estar pendiente de la adecuada utilización que al mismo le estaban dando sus hijos, principalmente ELDER JULIÁN, pues tal como aquélla lo admitió en las declaraciones recibidas en las diferentes etapas procesales, diariamente pernoctaba allí y descansaba, al menos, una vez a la semana (unas veces el martes y otras el miércoles), luego entonces, bien podía utilizar sus momentos libres para inspeccionar la residencia y preguntarle a sus vecinos, pero no lo hizo y esa indiligencia fue la que permitió la indebida destinación que aquí se está reprochando, visibilizando el incumplimiento de la función social, la que, contrario a lo que parece entender **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO** y su apoderado, no se traduce en las buenas relaciones que se tengan con los colindantes, sino que esta



37

característica ha sido concebida como el correcto aprovechamiento económico de los bienes por parte de su titular<sup>32</sup>.

Y no es que la Sala pretenda desconocer la condición personal y laboral de **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO**, pero no por ello puede concluirse, como lo hizo el *a quo*, que se trate de una mujer cabeza de hogar, que la haga merecedora de una especial protección o de la aplicación de un enfoque diferencial con perspectiva de género.

El segundo inciso del artículo 2º de la Ley 83 de 1993 claramente establece que se reputará como cabeza de familia, aquella mujer que «*siendo soltera o casada ejerce la jefatura femenina del hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar*»(Subraya y resalta la Sala)

En el presente asunto, no se cumple con el ingrediente normativo descrito en precedencia («*ausencia permanente del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda*») pues el hecho de que el ex compañero sentimental de **CASTAÑO QUINTERO** hubiese conformado un «*nuevo hogar*», no significa que hubiera desatendido los deberes que como padre le impone el ordenamiento jurídico colombiano.

Obsérvese como en la declaración rendida por la afectada en la fase inicial y ante la Fiscalía instructora, aquélla relató que al día siguiente del allanamiento y aprehensión de sus hijos «*llam(ó) al*

<sup>32</sup> Corte Constitucional, sentencia C-389 de 1994, M. P. Antonio Barrera Carbonell

78

*papá... para que se hiciera cargo de ellos y después en la noche al regresar a casa el papá de ello (sic) me dijo que era que Elder Julián estaba vendiendo marihuana en la casa y nosotros no sabíamos».*

Es claro entonces que la disolución del hogar, no trajo como consecuencia la ruptura de las relaciones personales entre **LUZ MIRIAM** y su excónyuge, por el contrario, del acápite que se acabó de transcribir, se concluye que ambos mantenían comunicación respecto de las situaciones referentes a sus descendientes en común, lo que desdibuja la figura de cabeza de hogar pues, como se dijo, no existe esa *«deficiencia sustancial de ayuda»* exigida en la legislación que regula la materia.

Con todo y lo que acaba de decirse, la negligencia atribuible a la afectada en la vigilancia y cuidado de su propiedad, no deviene de esa -no probada- condición de *«madre cabeza de familia»*, pues tal cual se indicó precedentemente, el arduo trabajo que, al parecer, aquélla desempeñaba, en manera alguna era incompatible o le impedía cumplir el mandato constitucional del artículo 58 Superior, pues en los momentos libres podía ejercer adecuadamente su rol de propietaria del inmueble, realizando inspecciones rigurosas y permanentes a efecto de evitar que su prole realizara actividades contrarias al ordenamiento jurídico.

De manera pues que, no es de recibo para la Sala que **CASTAÑO QUINTERO** pretenda escudarse en la extensa jornada de trabajo que supuestamente debía cumplir, a efecto de justificar la falta de diligencia empleada en la vigilancia de su propiedad e incluso respecto del cuidado de sus hijos, pues, como se dijo, el deber de ausentarse de su residencia por cuestiones laborales no era permanente.

Resulta evidente que la falta de cuidado, de la afectada en la gestión de su patrimonio, se contraviene con la función social y ecológica que le es connatural al derecho de propiedad, en la medida que no se preocupó en lo más mínimo por lo que sucedía al interior de su inmueble.

Así las cosas, conforme al acervo probatorio allegado, no queda otra alternativa que, revocar la sentencia proferida el 24 de julio de 2017 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia.

En consecuencia, se declarará la extinción del derecho de dominio sobre todos los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquier otra limitación a la disponibilidad o el uso del inmueble ubicado en la calle 21 número 46 A – 89, barrio Ciudadela Artesanal del municipio de Marinilla (Antioquia) e identificado con matrícula inmobiliaria 018-93819 y cédula catastral 440010060130000700000000, propiedad de **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO**.

Asimismo, se ordenará la tradición a favor de la Nación a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO)

Por lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

#### **RESUELVE**

**PRIMERO: REVOCAR** la sentencia proferida el 24 de julio de 2017 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de



40

Extinción de Dominio de Antioquia, de conformidad con las razones puntualizadas a lo largo de este proveído.


**SEGUNDO: DECLARAR** la extinción del derecho de dominio sobre todos los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquier otra limitación a la disponibilidad o el uso del inmueble ubicado en la calle 21 número 46 A – 89, barrio Ciudadela Artesanal del municipio de Marinilla (Antioquia) e identificado con matrícula inmobiliaria 018-93819 y cédula catastral 44001006013000070000000, propiedad de **LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO**.

**TERCERO: ORDENAR** la tradición del bien indicado en precedencia a favor de la Nación a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FISCO).

**CUARTO:** Contra esta sentencia no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  
AL DESPACHO DE ORIGEN.**

  
**MARÍA IDALÍ MOLINA GUERRERO**  
Magistrada

  
**WILLIAM SALAMANCA DAZA**  
Magistrado

  
**PEDRO ORIO AVELLA FRANCO**  
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D. C.  
SECRETARÍA SALA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO  
VISTA AL EXPEDIENTE  
En Bogotá, D. C. a 16 julio de 2019  
procedo a la revisión del expediente el (14)  
señor (C) Carlo Eduardo Papellu para.  
en su condición de Abogado Lin. Lustrero y del  
Carlo E. Papellu J. Derecho.  
Secretaria: [Signature]

41

**TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ**  
**LA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**  
**SECRETARÍA-**

Av. Calle 24 n.º 53 -28 / Oficina 310 / Torre C / Piso 3.

BOGOTÁ D.C. 08 JUL 2019

DOCTORA  
**ADRIANA DURAN ALVARADO**  
**FISCAL 34 ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**  
AV. CALLE 24 n.º 52 - 01  
**CIUDAD**

**TELEGRAMA** - NÚMERO **EMAH - 1384/**. ME PERMITO **NOTIFICARLE SENTENCIA** DE FECHA 4 DE JULIO DE 2019, DENTRO DEL PROCESO DE **EXTINCIÓN DE DOMINIO**, BAJO EL **RADICADO: 05000312001-2016-00008-01**, **AFECTADA: LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO.**, PROFERIDO POR LA H. MAGISTRADA **MARÍA IDALÍ MOLINA GUERRERO**, EN LA QUE **RESOLVIÓ: (1.-) REVOCAR** LA SENTENCIA PROFERIDA EL 24 JULIO DE 2017, POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA. **(2.-) DECLARAR LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE TODOS LOS DERECHO REALES PRINCIPALES O ACCESORIOS, DESMEMBRACIONES, GRAVAMENES O CUALQUIER OTRA LIMITACION A LA DISPONIBILIDAD O EL USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 21 N.º 46 A - 89, BARRIO CIUDADELA ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA (ANTIOQUIA) E IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 018-93819 Y CEDULA CATASTRAL 44001006013000070000000, PROPIEDAD DE LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO. (3.-) ORDENAR LA TRADICION DEL BIEN INDICADO EN PRECEDENCIA A FAVOR D EL NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO). (4.-) CONTRA ESTA SENTENCIA NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.**

CORDIALMENTE

  
EDGARDO MAURICIO ARZOLA HERNÁNDEZ  
ESCRIBIENTE

**TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ**  
**LA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**  
**SECRETARÍA-**

Av. Calle 24 n.º 53 -28 / Oficina 310 / Torre C / Piso 3.

BOGOTÁ D.C. 08 JUL 2019

DOCTOR  
**FRANKLIN CORDOBA PALACIO**  
**CORDINADOR PROCURADURIA REGIONAL DE ANTIOQUIA**  
CALLE 53 n.º 45 - 112 / PISO 21 / ED. COLSEGUROS  
**MEDELLÍN - ANTIOQUIA**

**TELEGRAMA** - NÚMERO **EMAH - 1385/**. ME PERMITO **NOTIFICARLE SENTENCIA** DE FECHA 4 DE JULIO DE 2019, DENTRO DEL PROCESO DE **EXTINCIÓN DE DOMINIO**, BAJO EL **RADICADO: 05000312001-2016-00008-01**, **AFECTADA: LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO.**, PROFERIDO POR LA H. MAGISTRADA **MARÍA IDALÍ MOLINA GUERRERO**, EN LA QUE **RESOLVIÓ: (1.-) REVOCAR** LA SENTENCIA PROFERIDA EL 24 JULIO DE 2017, POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA. **(2.-) DECLARAR LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE TODOS LOS DERECHO REALES PRINCIPALES O ACCESORIOS, DESMEMBRACIONES, GRAVAMENES O CUALQUIER OTRA LIMITACION A LA DISPONIBILIDAD O EL USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 21 N.º 46 A - 89, BARRIO CIUDADELA ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA (ANTIOQUIA) E IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 018-93819 Y CEDULA CATASTRAL 44001006013000070000000, PROPIEDAD DE LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO. (3.-) ORDENAR LA TRADICION DEL BIEN INDICADO EN PRECEDENCIA A FAVOR D EL NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO). (4.-) CONTRA ESTA SENTENCIA NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.**

CORDIALMENTE

  
EDGARDO MAURICIO ARZOLA HERNÁNDEZ  
ESCRIBIENTE

42

**TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ**  
**LA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**  
**SECRETARÍA-**

Av. Calle 24 n.º 53 -28 / Oficina 310 / Torre C / Piso 3.

BOGOTÁ D.C. 108 JUL 2019

DOCTOR

**CARLOS MARIO SALAZAR PINEDA**

**APODERADO DE LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO**

**CALLE 9 SUR n.º 32 - 87 / APARTAMENTO 902 / BARRIO EL POBLADO**

**MEDELLÍN - ANTIOQUIA**

**TELEGRAMA** - NÚMERO **EMAH - 1386/**. ME PERMITO **NOTIFICARLE SENTENCIA** DE FECHA 4 DE JULIO DE 2019, DENTRO DEL PROCESO DE **EXTINCIÓN DE DOMINIO**, BAJO EL RADICADO: 05000312001-2016-00008-01, **AFECTADA: LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO.**, PROFERIDO POR LA H. MAGISTRADA **MARÍA IDALÍ MOLINA GUERRERO**, EN LA QUE **RESOLVIÓ: (1.-) REVOCAR** LA SENTENCIA PROFERIDA EL 24 JULIO DE 2017, POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA. **(2.-) DECLARAR LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE TODOS LOS DERECHO REALES PRINCIPALES O ACCESORIOS, DESMEMBRACIONES, GRAVAMENES O CUALQUIER OTRA LIMITACIÓN A LA DISPONIBILIDAD O EL USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 21 N.º 46 A - 89, BARRIO CIUDADELA ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA (ANTIOQUIA) E IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 018-93819 Y CEDULA CATASTRAL 440010060130000700000000, PROPIEDAD DE LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO. (3.-) ORDENAR LA TRADICIÓN DEL BIEN INDICADO EN PRECEDENCIA A FAVOR D EL NACIÓN A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO). (4.-) CONTRA ESTA SENTENCIA NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.**

CORDIALMENTE,

  
EDGARDO MAURICIO ARBOLEA HERNÁNDEZ  
ESCRIBIENTE

**TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ**  
**LA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**  
**SECRETARÍA-**

Av. Calle 24 n.º 53 -28 / Oficina 310 / Torre C / Piso 3.

BOGOTÁ D.C. 108 JUL 2019

DOCTOR

**LUIS CARLOS CASTELBLANCO BELTRAN**

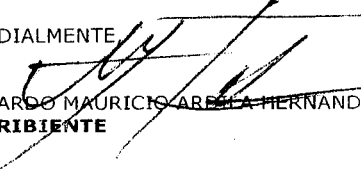
**APODERADO DE MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**

**CALLE 53 n.º 13 - 27.**

**CIUDAD**

**TELEGRAMA** - NÚMERO **EMAH - 1388/**. ME PERMITO **NOTIFICARLE SENTENCIA** DE FECHA 4 DE JULIO DE 2019, DENTRO DEL PROCESO DE **EXTINCIÓN DE DOMINIO**, BAJO EL RADICADO: 05000312001-2016-00008-01, **AFECTADA: LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO.**, PROFERIDO POR LA H. MAGISTRADA **MARÍA IDALÍ MOLINA GUERRERO**, EN LA QUE **RESOLVIÓ: (1.-) REVOCAR** LA SENTENCIA PROFERIDA EL 24 JULIO DE 2017, POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA. **(2.-) DECLARAR LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE TODOS LOS DERECHO REALES PRINCIPALES O ACCESORIOS, DESMEMBRACIONES, GRAVAMENES O CUALQUIER OTRA LIMITACIÓN A LA DISPONIBILIDAD O EL USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 21 N.º 46 A - 89, BARRIO CIUDADELA ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA (ANTIOQUIA) E IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 018-93819 Y CEDULA CATASTRAL 440010060130000700000000, PROPIEDAD DE LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO. (3.-) ORDENAR LA TRADICIÓN DEL BIEN INDICADO EN PRECEDENCIA A FAVOR D EL NACIÓN A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO). (4.-) CONTRA ESTA SENTENCIA NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.**

CORDIALMENTE,

  
EDGARDO MAURICIO ARBOLEA HERNÁNDEZ  
ESCRIBIENTE



43

**TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ**  
**LA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**  
**SECRETARÍA-**

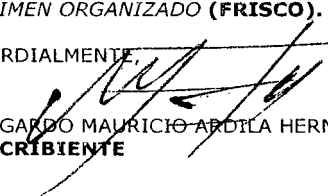
Av. Calle 24 n.º 53 -28 / Oficina 310 / Torre C / Piso 3.

BOGOTÁ D.C. \_\_\_\_\_

DOCTOR  
**LUZ MYRIAM CASTAÑO QUINTERO**  
**AFECTADA**  
CALLE 21 n.º 46 A - 89 / BARRIO CIUDADELA ARTESANAL  
**MARINILLA - ANTIOQUIA**

**TELEGRAMA** - NÚMERO **EMAH - 1389/**. ME PERMITO **NOTIFICARLE SENTENCIA** DE FECHA 4 DE JULIO DE 2019, DENTRO DEL PROCESO DE **EXTINCIÓN DE DOMINIO**, BAJO EL **RADICADO: 05000312001-2016-00008-01**, **AFECTADA: LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO.**, PROFERIDO POR LA H. MAGISTRADA **MARÍA IDALÍ MOLINA GUERRERO**, EN LA QUE **RESOLVIÓ: (1.-) REVOCAR** LA SENTENCIA PROFERIDA EL 24 JULIO DE 2017, POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA. **(2.-) DECLARAR LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE TODOS LOS DERECHO REALES PRINCIPALES O ACCESORIOS, DESMEMBRACIONES, GRAVAMENES O CUALQUIER OTRA LIMITACIÓN A LA DISPONIBILIDAD O EL USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 21 N.º 46 A - 89, BARRIO CIUDADELA ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA (ANTIOQUIA) E IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 018-93819 Y CEDULA CATASTRAL 440010060130000700000000, PROPIEDAD DE LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO. (3.-) ORDENAR LA TRADICIÓN DEL BIEN INDICADO EN PRECEDENCIA A FAVOR DEL NACIÓN A TRAVÉS DEL FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO). (4.-) CONTRA ESTA SENTENCIA NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.**

CORDIALMENTE,

  
EDGARDO MAURICIO ARDILA HERNÁNDEZ  
ESCRIBIENTE

**TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ**  
**LA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**  
**SECRETARÍA-**

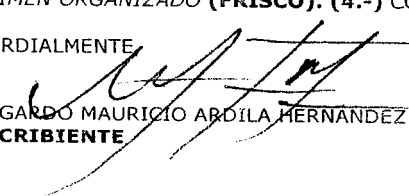
Av. Calle 24 n.º 53 -28 / Oficina 310 / Torre C / Piso 3.

BOGOTÁ D.C. \_\_\_\_\_

DOCTORA  
**LINA MARIA PALACIO URIBE**  
**REPRESENTANTE LEGAL DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMFAMA**  
DOCTORA  
**NATALIA HURTADO GARCIA**  
**APODERADA DE COMFAMA**  
CARRERA 45 n.º 49 A - 16.  
**MEDELLÍN - ANTIOQUIA**

**TELEGRAMA** - NÚMERO **EMAH - 1390/**. ME PERMITO **NOTIFICARLE SENTENCIA** DE FECHA 4 DE JULIO DE 2019, DENTRO DEL PROCESO DE **EXTINCIÓN DE DOMINIO**, BAJO EL **RADICADO: 05000312001-2016-00008-01**, **AFECTADA: LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO.**, PROFERIDO POR LA H. MAGISTRADA **MARÍA IDALÍ MOLINA GUERRERO**, EN LA QUE **RESOLVIÓ: (1.-) REVOCAR** LA SENTENCIA PROFERIDA EL 24 JULIO DE 2017, POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA. **(2.-) DECLARAR LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE TODOS LOS DERECHO REALES PRINCIPALES O ACCESORIOS, DESMEMBRACIONES, GRAVAMENES O CUALQUIER OTRA LIMITACIÓN A LA DISPONIBILIDAD O EL USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 21 N.º 46 A - 89, BARRIO CIUDADELA ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA (ANTIOQUIA) E IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 018-93819 Y CEDULA CATASTRAL 440010060130000700000000, PROPIEDAD DE LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO. (3.-) ORDENAR LA TRADICIÓN DEL BIEN INDICADO EN PRECEDENCIA A FAVOR DEL NACIÓN A TRAVÉS DEL FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO). (4.-) CONTRA ESTA SENTENCIA NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.**

CORDIALMENTE,

  
EDGARDO MAURICIO ARDILA HERNÁNDEZ  
ESCRIBIENTE

44

**TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ**  
**LA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**  
**SECRETARÍA-**

Av. Calle 24 n.º 53 -28 / Oficina 310 / Torre C / Piso 3.

BOGOTÁ D.C. 08 JUL 2019

DOCTOR

**JAIRO ACOSTA ARISTIZABAL**  
**PROCURADOR JUDICIAL II PENAL**  
CARRERA 10 n.º 16 - 82 / PISO 10.  
**CIUDAD**

**TELEGRAMA** - NÚMERO **EMAH - 1391/**. ME PERMITO **NOTIFICARLE SENTENCIA** DE FECHA 4 DE JULIO DE 2019, DENTRO DEL PROCESO DE **EXTINCIÓN DE DOMINIO**, BAJO EL RADICADO: 05000312001-2016-00008-01, **AFECTADA: LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO.**, PROFERIDO POR LA H. MAGISTRADA MARÍA IDALÍ MOLINA GUERRERO, EN LA QUE **RESOLVIÓ:** (1.-) REVOCAR LA SENTENCIA PROFERIDA EL 24 JULIO DE 2017, POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA. (2.-) DECLARAR LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE TODOS LOS DERECHO REALES PRINCIPALES O ACCESORIOS, DESMEMBRACIONES, GRAVAMENES O CUALQUIER OTRA LIMITACIÓN A LA DISPONIBILIDAD O EL USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 21 N.º 46 A - 89, BARRIO CIUDADELA ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA (ANTIOQUIA) E IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 018-93819 Y CEDULA CATASTRAL 44001006013000070000000, PROPIEDAD DE LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO. (3.-) ORDENAR LA TRADICIÓN DEL BIEN INDICADO EN PRECEDENCIA A FAVOR D EL NACIÓN A TRAVÉS DEL FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO). (4.-) CONTRA ESTA SENTENCIA NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.

CORDIALMENTE,

  
EDGARDO MAURICIO ARDILA HERNÁNDEZ  
ESCRIBIENTE

**TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ**  
**LA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**  
**SECRETARÍA-**

Av. Calle 24 n.º 53 -28 / Oficina 310 / Torre C / Piso 3.

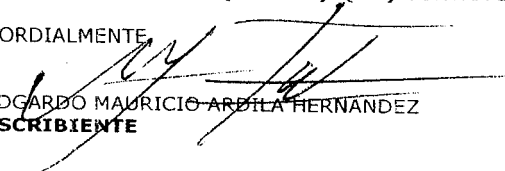
BOGOTÁ D.C. 08 JUL 2019

DOCTOR

**DORA JUDITH APONTE MELO**  
**CURADORA AD- LITEM**  
CARRERA 8 n.º 38 - 33 / OFICINA 1103  
**CIUDAD**

**TELEGRAMA** - NÚMERO **EMAH - 1392/**. ME PERMITO **NOTIFICARLE SENTENCIA** DE FECHA 4 DE JULIO DE 2019, DENTRO DEL PROCESO DE **EXTINCIÓN DE DOMINIO**, BAJO EL RADICADO: 05000312001-2016-00008-01, **AFECTADA: LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO.**, PROFERIDO POR LA H. MAGISTRADA MARÍA IDALÍ MOLINA GUERRERO, EN LA QUE **RESOLVIÓ:** (1.-) REVOCAR LA SENTENCIA PROFERIDA EL 24 JULIO DE 2017, POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA. (2.-) DECLARAR LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE TODOS LOS DERECHO REALES PRINCIPALES O ACCESORIOS, DESMEMBRACIONES, GRAVAMENES O CUALQUIER OTRA LIMITACIÓN A LA DISPONIBILIDAD O EL USO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 21 N.º 46 A - 89, BARRIO CIUDADELA ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA (ANTIOQUIA) E IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 018-93819 Y CEDULA CATASTRAL 44001006013000070000000, PROPIEDAD DE LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO. (3.-) ORDENAR LA TRADICIÓN DEL BIEN INDICADO EN PRECEDENCIA A FAVOR D EL NACIÓN A TRAVÉS DEL FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO). (4.-) CONTRA ESTA SENTENCIA NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.

CORDIALMENTE,

  
EDGARDO MAURICIO ARDILA HERNÁNDEZ  
ESCRIBIENTE

CORREO CERTIFICADO - FRANQUICIA POSTAL

Enviando lo mejor de los colombianos

472

RAZON SOCIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CORPORACIÓN - UNIDAD O JUZGADO

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C. SALA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Nº DE COMUNICACIÓN O PROCESO

PLANILLA No 112-6

DIRECCIÓN REMITENTE

AV. CALLE 24 No 53 - 28 TORREC - PISO 3 - 4233390 ext 8389/90

FECHA DE IMPOSICION

08 DE JULIO DE 2019

CIUDAD DE IMPOSICION

BOGOTÁ, D.C.

E	NOMBRE DE DESTINATARIO	DIRECCION	CIUDAD	DEPARTAMENTO	OFICIO
1	ADRIANA DURAN ALVARADO - FISCAL 34 DE EXTINCIÓN DE DOMINIO	AV. CALLE 24 n.º 53 - 01.	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA	EMAH-1384
2	DR. FRANKLIN CORDOBA PALACIO - COORDINADOR PROCURADOR	CALLE 53 n.º 45 - 112 / EDF. COLSEGUROS	MEDELLIN	ANTIOQUIA	EMAH-1385
3	DR. CARLOS MARIO SALAZAR PINEDA - APOD. LUZ MYRIAM CASTAÑO	CALLE 9 SUR n.º 32 - 87 / APARTAMENTO 902 / BARRIO EL POBLADO	MEDELLIN	ANTIOQUIA	EMAH-1386
4	DR. LUIS CARLOS CASTELBLANCO BAELETRAN - APOD. MINISTERIO DE JUSTICIA	CALLE 53 n.º 13 - 27.	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA	EMAH-1388
5	SRA. LUZ MYRIAM CASTAÑO QUINTERO	CALLE 21 n.º 46 A - 89 / BARRIO CIUDADELA AETESANAL	MARINILLA	ANTIOQUIA	EMAH-1389
6	DR. LINA MARIA PALCIO URIBE / DRA. NATALIA HURTADO GARCIA - COMIFAMA	CARRERA 45 n.º 49 A - 16	MEDELLIN	ANTIOQUIA	EMAH-1390
7	JAIBO ACOSTA ARISTIZABAL - PROCURADOR JUD. II PENAL	CARRERA 10 n.º 16 - 82 / PISO 10.	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA	EMAH-1391
8	DRA. DORA JUDITH MONTE MELO - CURADORA AD-ITEM	CARRERA 8 n.º 38 - 33 / OFICINA 1103	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA	EMAH-1392
9	DR. HENRY ALBERTO DIAZ NAVAS - PROCURADOR 60 JUD. II PENAL	CALLE 11 n.º 5 - 54 / OFICINA 405	CALI	VALLE DEL CAUCA	EMAH-1393
10	DR. CARLOS GUSTAVO TIMANA ERAZO - APODERADO	CALLE 11 A n.º 70 - 35 / APARTAMENTO 404 - 4	CALI	VALLE DEL CAUCA	EMAH-1394
11	DRA. PATRICIA SALVEDRA YEPES - FISCAL 234 EXTINCION	CALLE 10 n.º 5 - 77 / OFICINA 1105 / EDF. SAN FRANCISCO	CALI	VALLE DEL CAUCA	EMAH-1395
12	DRA. MONICA ALEXANDRA REDONDO VARGAS - MINJUSTICIA	CALLE 53 n.º 13 - 27.	BOGOTÁ D.C.	CUNDINAMARCA	EMAH-1396
13	DR. CARLOS GUSTAVO TIMANA / APOD. VICENTE PRADO	CARRERA 1 A n.º 56 - 49 / OFICINA 503-7.	CALI	VALLE DEL CAUCA	EMAH-1397
14	VICENTE PRADO	CALLE 17 n.º 11 B - 69 / 73 / BARRIO SUCRE	CALI	VALLE DEL CAUCA	EMAH-1398
15	VICENTE PRADO	DIAGONAL 22 P n.º T 69 - 18 / BARRIO MARROQUIN	CALI	VALLE DEL CAUCA	EMAH-1399
16	VICENTE PRADO	CARRERA 26 B n.º 73 A - 26	CALI	VALLE DEL CAUCA	EMAH-1400
17	VICENTE PRADO	CARRERA 26 BIS n.º 73 a - 26	CALI	VALLE DEL CAUCA	EMAH-1401
18					

TRIBUNAL SUPERIOR DE LA JUDICATURA

BOGOTÁ, D.C.

08/07/2019

08/07/2019

Nombre y sello impositor

Nombre del transportista

Fecha y hora

Orden de servicio nº

Fecha y hora

45



46

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ  
SALA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**

**EDICTO**

**EL SECRETARIO DE LA SALA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**

**HACE SABER:**

QUE EN EL EXPEDIENTE RADICADO BAJO EL NÚMERO **050003120001201600008-01** SIENDO AFECTADO(S) **LUZ MIRIAM CASTAÑO QUINTERO**, LA SALA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, CON PONENCIA DEL MAGISTRADO **MARIA IDALI MOLINA GUERRERO**, SEGÚN ACTA **071**, DICTÓ FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA DE FECHA **CUATRO (4) DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019)**, PARA RESOLVER EL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA RESPECTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO 1º PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA, QUE DECIDIO NO AFECTAR EL DOMINIO DE UN BIEN, EN EL QUE SE RESOLVIÓ: **REVOCAR LA SENTENCIA CONSULTADA Y DECLARAR LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO DEL INMUEBLE CON M.I. 018-93819 DE MARINILLA, ANTIOQUIA.**

**LUIS ALEJANDRO PÉREZ WALTEROS**  
Secretario

**FIJACIÓN: 15-JULIO-2019 - 8:00 A.M.** EN LUGAR PÚBLICO DE LA SECRETARÍA, POR EL TÉRMINO DE TRES (3) DÍAS HÁBILES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO (LEY 1708 DE 2014).

**DESEFIJACIÓN: 17-JULIO-2019 - 5:00 P.M.**

**LUIS ALEJANDRO PÉREZ WALTEROS**  
Secretario

**EJECUTORIA (ARTÍCULO 61 LEY 1708 DE 2014): CORRE 18, 19 Y 22 DE JULIO DE 2019.**

**LUIS ALEJANDRO PÉREZ WALTEROS**  
Secretario



44

44

44

Marinilla, 28 de marzo de 2022

Respetado/as

**Sociedad Activos Especiales SAE-SAS**

Calle 93B No. 13 - 47 Bogotá D.C

atencionalciudadano@saesas.gov.co

**Referencia:** Consideraciones entrega  
vivienda extinción dominio

Reciban un cordial saludo,

Luz Miriam Castaño Quintero, identificada como aparece al pie de mi firma, con base en el derecho de petición realizo las siguientes peticiones y consideraciones sobre la entrega de mi vivienda identificada con la matrícula inmobiliaria 018-93819 en el proceso de extinción de dominio con radicado 050003120001201600008, así:

- Soy madre cabeza de familia, de quien dependen mi hijo en condición de discapacidad.
- Desde hace aproximadamente quince (15) años habitó con mis tres hijos en mi vivienda en Marinilla, Antioquia.
- Por una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá estoy siendo obligada, junto con mi familia, a desalojar de manera forzada mi casa, el único lugar con el que contamos para vivir.
- Cabe resaltar que soy una persona intachable y no tengo ningún tipo de antecedente judicial y nunca he sido sometida a ninguna investigación penal. Tampoco he contribuido de manera alguna a que en mi hogar se cometan actividades ilícitas.
- La sentencia relacionada desconoció mi condición de mujer cabeza de hogar e impuso una carga excesiva al quitarme mi casa, sin considerar mi situación de vulnerabilidad y la de mis hijos, aspecto que debe despertar la indignación de la comunidad en general.
- Además, es relevante advertir que el proceso de extinción de dominio relacionado afecta los derechos de mi hijo en condición de discapacidad y no se ha establecido la manera cómo se garantizarán los derechos de mi hijo con discapacidad en la entrega y desalojo.
- Teniendo en cuenta que SAE-SAS le ha entregado a mi hijo discapacitado una carta en la que se pide entregar mi casa, so pena de iniciarse un proceso de desalojo forzado o denuncia penal, es transcendental que tengan conocimiento que mi familia y yo no contamos con una vivienda a la cual podamos ir.
- Sumado a lo anterior, atravesemos por una situación económica crítica, con mínimos ingresos económicos, situación que se ha agravado con la declaración de la emergencia sanitaria por el virus Covid-19 desde el año 2020 y que debe despertar su responsabilidad social.
- En situaciones en las que se ven afectados los derechos de personas de especial protección por un desalojo forzado, como en el caso de mi hijo con discapacidad, el Estado debe adoptar medidas especiales y ofrecer alternativas para la reubicación. Esta regla se ha establecido con base en el artículo 13 y 51 de la Constitución Política en las sentencias de la Corte Constitucional T-472 de 2009, T-282 de 2011, T-528 de 2011, T-556 de 2011, T-637 de 2013, entre otras decisiones judiciales.

Por las anteriores consideraciones, estoy legitimada para exigir que como condición a la entrega voluntaria y desalojo de mi vivienda se garanticen mis derechos y en especial los derechos especialmente reconocidos a mi hijo con discapacidad. Por ello, solicito se me dé respuesta a las siguientes peticiones:

1. Teniendo en cuenta que el desalojo puede vulnerar la dignidad humana de una persona con especial protección del Estado, solicito a SAE -SAS se abstenga de realizar cualquier procedimiento o diligencia, hasta tanto se garanticen los derechos de mi hijo con discapacidad en la forma establecida en la Ley y la Constitución.
2. También solicito a SAE-SAS me informe si en el proceso de entrega y desalojo ha considerado la situación de mi hijo con discapacidad y si esta al tanto de la evidente injusticia que se quiere cometer contra mi familia, injusticia que puede evidenciarse con la simple lectura de la sentencia de extinción de dominio.
3. Solicito a SAE-SAS me informe cuales son las etapas y procedimientos que va adelantar para lograr el desalojo forzado de mi casa y cuando serán adelantados estos procedimientos.
4. Solicito a SAE-SAS me informe que derechos tengo frente a al entrega y desalojo de mi casa.

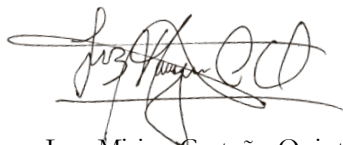
Adjunto cédula y certificado de mi hijo con discapacidad Jonatan Toro Castaño y sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de extinción de dominio.

Copio de esta carta a la Defensoría del Pueblo y a la Personería en el municipio de Marinilla con la finalidad que adelanten las actuaciones de su competencia teniendo en cuenta el deber de garantía de los derechos humanos y la obligación de impedir acciones evidentemente injustas y violatorias de derechos fundamentales.

### **Notificaciones**

Recibiré notificaciones el correo electrónico milly73@hotmail.com y en la dirección cl 21 #46\*89 Marinilla, Antioquia.

Cordialmente,



Luz Mirian Castaño Quintero

C.C 43449476

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.038.408.231**

**TORO CASTAÑO**

APELLIDOS

**JONATAN**

NOMBRES

**NO FIRMA**

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

**08-ENE-1990**

**COCORNA**  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.82**

**O+**

**M**

ESTATURA

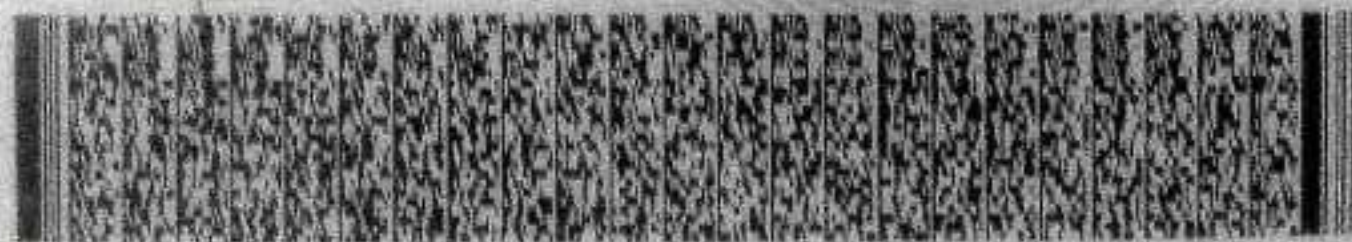
G.S. RH

SEXO

**08-FEB-2008 MARINILLA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-0117800-00714757 M-1038408231-20150612

0044493832A 1

44310351





La salud  
es de todos

Minsalud

## CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

### a. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

1.1 Primer nombre	1.2 Segundo nombre	1.3 Primer apellido	1.4 Segundo apellido
JONATAN		TORO	CASTAÑO

### 1.5 Documento de identidad

Certificado de Nacido Vivo	Registro civil	Tarjeta de identidad	Cédula de ciudadanía	X	Cédula de extranjería	Pasaporte	Carnet diplomático	Permiso especial de permanencia
----------------------------	----------------	----------------------	----------------------	---	-----------------------	-----------	--------------------	---------------------------------

Número de documento de identidad: 1038408231

### b. LUGAR Y FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

2.1 IPS donde se realiza la certificación	2.2 Fecha		
	Año	Mes	Día
EL COMITÉ DE REHABILITACIÓN DE ANTIOQUIA	2021	8	6

2.3 Departamento	2.4 Municipio
ANTIOQUIA	MARINILLA

### c. CATEGORIA DE DISCAPACIDAD

### d. NIVEL DE DIFICULTAD EN EL DESEMPEÑO

Física	SI	X	NO	
Visual	SI		NO	X
Auditiva	SI		NO	X
Intelectual	SI		NO	X
Psicosocial (Mental)	SI	X	NO	
Sordoceguera	SI		NO	X
Múltiple	SI	X	NO	

Dominio	Porcentaje
Cognición	79.17
Movilidad	90.00
Cuidado Personal	62.50
Relaciones	65.00
Actividades de la Vida Diaria	85.00
Participación	84.38
GLOBAL	77.67

### e. PERFIL DE FUNCIONAMIENTO

#### 1. Codigos Funciones Corporales

b164.3 b310.3 b770.3

#### 2. Codigos Estructuras Corporales

s110.378

#### 3. Codigos Actividades y Participación

d175.4 d4602.4 d598.4

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

f. FIRMAS DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD

Nombre	Profesión	Firma
--------	-----------	-------

ADRIANA MARIA OSPINA PALACIO

Psicología

CC-43221123

*[Firma]*  
Angela Alayo

ANGELA MARIA ARANGO ZAPATA

Fonoaudiología

CC-43576237

CARLOS ALBERTO QUINTERO  
VALENCIA

Medicina

CC-98528354

g. FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Yo, JONATAN TORO CASTAÑO

manifiesto que: SI

estoy de acuerdo con el resultado de la certificación que abajo firmo.

*[Firma]*  
Nombre y Firma

43449476  
Documento: CC-1038408231

Autorizó el uso de la información consignada en el Registro de Discapacidad para los fines definidos en la normatividad que lo regula.

SI



*El certificado de discapacidad no se empleará como medio para el reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de Pensiones o de Riesgos Laborales ni para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Sin las firmas requeridas el certificado de discapacidad no tendrá validez*

Medellín, 05 de mayo de 2022

CS2022-010732

Señora:  
**Luz Miriam Castaño Quintero**  
Calle 21 # 46 A 89  
milly73@hotmail.com  
Marinilla, Antioquia

**Asunto:** Respuesta a su solicitud con código seguimiento HXQE3484 y consecutivo 30949

Respetada señora:

La SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE S.A.S., es una Sociedad por Acciones Simplificada, comercial, entidad de economía mixta, encargada de la administración de bienes objeto de procesos de extinción de dominio y extintos, los cuales forman parte del FRISCO (Fondo para Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado), se permite informar lo siguiente:

1. En primer lugar, nos permitimos informar que el inmueble identificado con FMI N°018-93819 se encuentra bajo administración de esta entidad de acuerdo con la declaración de extinción de dominio anotada en el respectivo certificado de libertad.

ANOTACION: Nro. 9 Fecha: 28-08-2019 Radicación: 2019-018-6-7634

Doc.: SENTENCIA 071 DEL 2019-07-04 00:00:00 JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CTO. ESPECIALIZADO DE EXTINCION DE DOMINIO DE MEDELLIN VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: 0142 EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO PRIVADO (MODO DE ADQUISICION) PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio-Titular de dominio incompleto)

DE: CASTAÑO QUINTERO LUZ MIRIAM CC 43449476

A: LA NACION (FRISCO) X

Por tal motivo desde el momento de la incautación de los predios, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, ejerce como secuestre, es por ello por lo que le corresponde a esta entidad ejecutar las acciones propias de administración del bien, lo que implica entre otras cosas realizar los esfuerzos y gestiones necesarias tendientes a poner productivo los bienes de acuerdo con lo normado en la Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1708 de 2014.

Para el bien citado NO es factible ofrecer la posibilidad de realizar negociación ni con los afectados en el proceso de extinción de dominio, ni con los familiares del afectado.

Dirección General: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444

Bogotá: Calle 96 No. 13 - 11 Piso 3 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A - 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - [atencionalciudadano@saesas.gov.co](mailto:atencionalciudadano@saesas.gov.co) - [www.saesas.gov.co](http://www.saesas.gov.co)





En efecto, los Artículos 1 y 30 de la Ley 1708 de 2014, brindan la definición de afectado, como aquel que:

*"(..) ARTICULO 1. DEFINICIONES. Afectado. Persona que afirma ser titular de algún derecho sobre el bien que es objeto del procedimiento de extinción de dominio, con legitimación para acudir al proceso"*

*"ARTÍCULO 30. AFECTADOS. Se considera afectada dentro del trámite de extinción de dominio a toda persona, natural o jurídica, que alegue ser titular de derechos sobre alguno de los bienes que sean objeto de la acción extinción de dominio:*

*En el caso de los bienes corporales, muebles o inmuebles, se considera afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue tener un derecho patrimonial sobre los bienes objeto de la acción de extinción de dominio."*

De igual manera el artículo 28 del mismo Código de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014) indica que:

*"ARTÍCULO 28. SUJETOS PROCESALES. Son sujetos procesales la fiscalía general de la Nación y los afectados."*

Ahora bien, entendiéndose por afectado, para este tema, como aquella persona que alega ser titular de derechos sobre alguno de los bienes que sean objeto de la acción extinción de dominio y tratándose que el inmueble tiene una medida cautelar vigente, la Metodología de la Administración en su sección 3 numeral 3.3.1. expone los lineamientos específicos para estos casos de la siguiente manera:

*"Si el afectado o sus familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, son los ocupantes de los inmuebles secuestrados, se deben iniciar las acciones de desalojo para la recuperación del inmueble, ello teniendo en cuenta que el código de ética y buen gobierno de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. no permite tramitar la legalización de ocupación del inmueble con el afectado o alguno de sus familiares."*

De igual forma, y como se indica en el extracto anterior, el código de ética, conducta y buen gobierno de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., en su capítulo 6 el cual trata de inhabilidades, prohibiciones y restricciones hace especial referencia a que no podrán comprar, arrendar o explotar económicamente activos de la SAE o administrados por ella cuando se configure alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política, en las leyes que le sean aplicables, especialmente el artículo 102 de la Ley 489 de 1998, en las normas que en desarrollo de éstos expidan las autoridades competentes y en cualquiera de las causales relacionadas en el Código de Ética y de Buen Gobierno.



Por lo tanto, nos permitimos indicar que en virtud de la Ley 1708 de 2014, especialmente de los artículos 1 y 30, la persona que ostenta la calidad de afectada es la señora LUZ MIRIAN CASTAÑO QUINTERO, tal como puede apreciar en las siguientes anotaciones del certificado de tradición:

ANOTACION: Nro. 4 Fecha: 28-12-2005 Radicación: 2005-018-6-8766  
Doc.: ESCRITURA 4597 DEL 2005-12-14 00:00:00 NOTARIA 3A. DE MEDELLIN VALOR ACTO: \$28.000.000  
ESPECIFICACION: 0125 COMPRAVENTA [MODO DE ADQUISICION] (MODO DE ADQUISICION)  
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio-Titular de dominio incompleto)  
DE: ALVAREZ GOMEZ JUANITA CC 39451677  
DE: DUQUE ZULUAGA VICTOR HUGO CC 70904796  
A: CASTAÑO QUINTERO LUZ MIRIAN CC 43449476 X  
ANOTACION: Nro. 7 Fecha: 25-11-2013 Radicación: 2013-018-6-13250  
Doc.: RESOLUCION 12182 E.D DEL 2012-10-31 00:00:00 FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D. C. VALOR ACTO: \$  
ESPECIFICACION: 0436 EMBARGO EN PROCESO DE FISCALIA SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO (MEDIDA CAUTELAR)  
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio-Titular de dominio incompleto)  
DE: UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS  
A: CASTAÑO QUINTERO LUZ MIRIAN CC 43449476

Tal y como se mencionó anteriormente, entendiéndose por afectado, para este tema, como aquella persona que alega ser titular de derechos sobre alguno de los bienes que sean objeto de la acción extinción de dominio y tratándose que el inmueble tiene una sentencia de extinción de dominio y se encuentra sin contrato de arrendamiento actual, la Metodología de la Administración en su sección 3 numeral 3.3.1. expone los lineamientos específicos para estos casos de la siguiente manera:

*“Si el afectado o sus familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, son los ocupantes de los inmuebles secuestrados, se deben iniciar las acciones de desalojo para la recuperación del inmueble, ello teniendo en cuenta que el código de ética y buen gobierno de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. no permite tramitar la legalización de ocupación del inmueble con el afectado o alguno de sus familiares.*

Es por el motivo antes indicado que se emitió comunicación por parte de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S donde se insta a la peticionaria para que realice la entrega voluntaria del bien con plazo límite el 9 de mayo de 2022, etapa persuasiva que siempre SAE ejecuta antes de ejercer funciones de policía administrativa y evitar de esta forma un desalojo forzoso.



Por todo lo anterior, la Sociedad de Activos Especiales SAS, no comete irregularidad al apegarse al precepto contenido en el artículo 94 de la Ley 1708 de 2014, por el contrario, apartarse de él aparejaría el incumplimiento del mandamiento legal y constitucional. Es por ello por lo que, al encontrarse extinto el bien mencionado, es deber de las autoridades ejecutivas cumplir con la regulación que, en desarrollo de los artículos Superiores, la ley impone, incluyendo actos dispositivos como la recuperación material, para dar continuidad al proceso de administración sobre los inmuebles.

2. Sobre su preocupación respecto de la garantía de los derechos fundamentales del señor Jonatan Toro Castaño, quién está en situación de discapacidad, dentro del protocolo interno de la SAE para las diligencias de desalojo, como entidad tenemos el deber de citar a los entes garantes correspondientes para que realicen el acompañamiento y se haga efectiva la protección de los derechos de todas las personas que ocupan el inmueble objeto de desalojo. Para tal diligencia, la SAE citó a las siguientes entidades; Policía Nacional, Personería Municipal, Secretaría de Familia e Inclusión, Secretaría de Salud y Comisaría de Familia. Las cuales estarán presentes en la diligencia de desalojo y prestas a brindar la atención acorde a sus funciones.

Sobre los fundamentos de la sentencia de extinción de dominio, la SAE S.A.S no se pronuncia al respecto ya que el proceso penal y administrativo es independiente de la entidad.

3. De acuerdo con el procedimiento tendiente a la recuperación del inmueble, lo primero que se realiza es la entrega de una carta donde se invita a entregar voluntariamente el inmueble; esta carta se entregó en el mes de marzo en la dirección Calle 21 3 46 A-89 de Marinilla, Antioquia y fue recibida por el señor Jonatan Toro Castaño. Una vez pasada la fecha límite de plazo para la entrega se procede a programar la diligencia de desalojo y ésta es notificada a los ocupantes dentro del término señalado por la metodología SAE que es de tres (3) días hábiles antes de la diligencia. La notificación se realizó el lunes 02 de mayo de 2022, entregando la notificación personalmente al señor Jonatan Toro Castaño. Finalmente, y con el debido proceso realizado a cabalidad, se tiene programada la diligencia de desalojo para el martes 10 de mayo de 2022 a las 9:00 de la mañana. Así mismo, se le recuerda a la peticionaria que el desalojo es la última instancia que toma la entidad, por lo que se le invita a realizar la entrega voluntaria, para la cual tiene plazo hasta el lunes 09 de mayo de 2022.
4. Frente a sus derechos, el día 10 de mayo en la diligencia le serán respetados y garantizados, así como lo han sido durante todo el procedimiento.

Finalmente, me permito informarle que permanecemos atentos a cualquier inquietud, la cual será resuelta en nuestras oficinas ubicadas en la Carrera 43ª N°14-27 Edificio Colinas del Poblado, Oficina 901 en la Ciudad de Medellín (Antioquia), o en el teléfono 6040132.

Dirección General: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444

Bogotá: Calle 96 No. 13 - 11 Piso 3 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A - 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - [atencionalciudadano@saesas.gov.co](mailto:atencionalciudadano@saesas.gov.co) - [www.saesas.gov.co](http://www.saesas.gov.co)



Cordialmente,



**Alejandro Henao Barrera**  
Gerente Regional Occidente

APROBÓ: Mónica Cadavid Zuleta

ELABORÓ: María Paula Santa

ARCHIVO: 180.213.01/018-93819



Dirección General: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444

Bogotá: Calle 96 No. 13 - 11 Piso 3 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A - 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - [atencionalciudadano@saesas.gov.co](mailto:atencionalciudadano@saesas.gov.co) - [www.saesas.gov.co](http://www.saesas.gov.co)





**SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S**

**Resolución No.**

**0452**

"La cual ordena el ejercicio directo de las facultades de policía administrativa para la entrega real y material de un activo"

**La suscrita Presidenta de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.**

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1849 de 2017, "por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1708 de 2014"

**CONSIDERANDO**

Que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – S.A.E. S.A.S., es una sociedad de economía mixta de orden nacional autorizada por la Ley, de naturaleza única y sometida al régimen del derecho privado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, con autonomía administrativa, presupuestal y patrimonio propio.

Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 90 de la Ley 1708 de 2014, el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el Crimen Organizado FRISCO, es una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Que en virtud de lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 22 de la Ley 1849 de 2017, el cual modifica el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, *"El administrador del Frisco tendrá la facultad de policía administrativa para la recuperación física de los bienes que se encuentren bajo su administración."*

Que la ley 1437 de 2011 establece los principios de eficacia, economía y celeridad, en virtud de los cuales las autoridades administrativas deben buscar que los procedimientos logren su finalidad, evitar dilaciones o retardos, garantizar austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas, a través del impulso oficioso de los mismos, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.

Que la FISCALÍA 21 ESPECIALIZADA UNIDAD NACIONAL PARA LA EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO Y CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, mediante Resolución de Inicio de fecha 31/10/2012<sup>1</sup>, dentro del radicado 12182.E.D, resolvió dar inicio a la acción de extinción de dominio, ordenando las medidas cautelares de embargo, secuestro y consecuente suspensión del poder dispositivo del bien inmueble CALLE 21 #46A-89, CARRERA 21 N° 46 A 89 ubicado en el Municipio de MARINILLA (ANTIOQUIA), identificado con el folio de matrícula inmobiliaria N° 018-93819, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de MARINILLA.

Que la FISCALÍA 21 DE EXTINCION DE DOMINIO, mediante acta de secuestro de inmueble de fecha 18/12/2012<sup>2</sup>, declaró legalmente secuestrado el (los) citado (s) bien (es), por lo tanto, dejó a disposición del administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado – FRISCO.

Que a través de memorando ZEUS N° CI2019-002192, la Gerencia Regional OCCIDENTE, solicitó el inicio de las acciones tendientes a la recuperación material del bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria N° 018-93819, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de MARINILLA, indicando que en la visita realizada al inmueble el 03/05/2018, se evidenció que el predio se encuentra ocupado de manera irregular por terceros.

Que en razón de lo anterior, los actuales ocupantes del inmueble no poseen título alguno emanado por la Sociedad de Activos Especiales SAS, que legitime su permanencia y explotación sobre el mismo, considerando que la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos, ordenó las medidas cautelares de embargo, secuestro y consecuente suspensión del poder dispositivo respecto de los bienes inmuebles identificados en esta resolución, razón por la cual sus ocupantes están impidiendo a esta entidad ejercer la correcta administración del bien conforme a lo ordenado en el artículo 90 de la Ley 1708 de 2014.

Que, en cumplimiento de lo consagrado en las mencionadas normas, se debe requerir a los actuales ocupantes y/o demás personas que se encuentren en el bien inmueble CALLE 21 #46A-89, CARRERA 21 N° 46 A 89 ubicado en el Municipio de MARINILLA (ANTIOQUIA), identificado con el folio de matrícula inmobiliaria N° 018-93819, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de MARINILLA, para que efectúen la entrega real y material del mismo a favor de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS.

En mérito de lo expuesto,

<sup>1</sup> Expediente Administrativo 20100908000908, P, 41-49

<sup>2</sup> Expediente Administrativo 20100908000908 P, 2-5



Resolución No. 0452

RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO: EJERCER LA FUNCION DE POLICIA ADMINISTRATIVA** con el fin de materializar la presente resolución para la entrega real y material del bien inmueble CALLE 21 #46A-89, CARRERA 21 N° 46 A 89 ubicado en el Municipio de MARINILLA (ANTIOQUIA), identificado con el folio de matrícula inmobiliaria N° 018-93819, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de MARINILLA, respecto del cual la autoridad judicial resolvió dar inicio a acción de extinción del derecho real de dominio a favor del Estado, decisión que se motiva teniendo en cuenta el ejercicio de la función de policía administrativa.

**ARTÍCULO SEGUNDO: HACER** efectiva la orden de entrega real y material del inmueble identificado en el artículo anterior, el cual recibirá materialmente la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.

**ARTÍCULO TERCERO:** Para los fines establecidos en el artículo primero de la presente Resolución, comunicar por el medio más expedito el contenido de la misma, al ocupante del inmueble y/o demás personas que se encuentren en el lugar, para que en el término de tres (3) días desde la fecha de comunicación, entregue a la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS, el inmueble referenciado, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.5.5.2.9., de Decreto 2136 del 4 de noviembre de 2015.

**ARTÍCULO CUARTO:** Prevenir a los ocupantes del inmueble ya mencionado y/o demás personas que se encuentren en el lugar, cualesquiera que sean, que, en caso de no producirse la entrega real y material del inmueble antes mencionado, en el término establecido en el artículo tercero del presente acto administrativo, se procederá a hacer efectiva la entrega del mismo con el apoyo de la fuerza pública, si fuere necesario.

**ARTÍCULO QUINTO:** Para el cumplimiento de lo señalado en el artículo cuarto de la presente resolución se ordena al Gerente de la Regional OCCIDENTE designar un(os) funcionario(s), para ejercer la función de policía de índole administrativa y realizar la entrega material de los bienes inmuebles objeto de esta resolución a la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS.

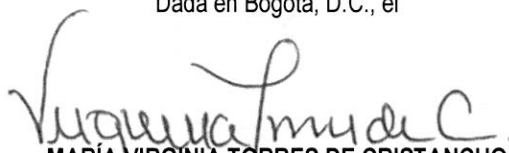
**ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR** el contenido de la presente Resolución a la Gerencia Regional OCCIDENTE, para que coordine las acciones necesarias para materializar el presente acto administrativo con las autoridades que de acuerdo a las particularidades del caso, se requiera de su concurrencia, tales como:

1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF
2. Alcaldía Municipal del lugar donde se ubique el bien o bienes objeto de la presente Resolución
3. Personería Municipal del lugar donde se ubique el bien o bienes objeto de la presente Resolución
4. Defensoría del Pueblo
5. Policía Nacional
6. Las demás que se consideren pertinentes para la materialización de la presente Resolución

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** Advertir que, contra la presente resolución por tratarse de un acto de ejecución, no proceden los recursos por la vía gubernativa.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE  
Dada en Bogotá, D.C., el

24 ABR 2019

  
MARÍA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO  
Presidenta



Aprobó: Mauricio Solórzano Arenas -Vicepresidente Jurídico  
Elaboró: NELSON- Profesional  
Archivo: SERIE 213 -SUBSERIE 16 serie y el Saneamiento Jurídico para Desalojo de Bienes Inmuebles